



LA AGROINDUSTRIA PARA EL DESARROLLO ARGENTINO

Aportes para una política de Estado



JUNIO 2011

Lucio Reca (1983 - 1986)

Marcelo Regúnaga (1991 - 1993) (2001)

Jesús Leguiza (2001 - 2002)

Rafael Delpech (2002)

Constituimos un grupo de ex Secretarios de Agricultura de la Nación provenientes de Administraciones que, expresando distintas corrientes políticas, han gobernado la Argentina desde el retorno democrático en diciembre de 1983.

Este documento es el resultado de una reflexión colectiva de los firmantes en el período setiembre 2010 -junio 2011 guiada por la experiencia ganada en el curso de nuestras respectivas gestiones, orientada a identificar los temas que consideramos prioritarios en la formulación de una Política de Estado que favorezca un vigoroso y sostenido desarrollo agropecuario, basado en una combinación virtuosa del aprovechamiento ordenado de los recursos naturales, la capacidad empresarial y la tecnología, en función de criterios que concilien los objetivos de crecimiento económico y equidad social. Es decir que nuestro objetivo es contribuir con propuestas al bien común de la sociedad argentina.

Somos conscientes de las limitaciones de este análisis, resultante de nuestras capacidades individuales y del tiempo disponible de cada uno para la tarea. En consecuencia este trabajo debe tomarse como una contribución al debate que debe darse en la Argentina para que la política agropecuaria nacional alcance la categoría de Política de Estado, consensuada por los distintos integrantes de la sociedad, y en consecuencia estable.

Deseamos expresar nuestro agradecimiento al CARI por haber servido de ámbito para el trabajo y al Ing. Martín Piñeiro quien coordinó la labor del grupo y aportó valiosas sugerencias. Finalmente agradecemos al Dr. Hugo Cohan por sus ideas, comentarios y su infatigable y eficiente labor editorial.

Lucio Reca (1983-1986)
Marcelo Regúnaga (1991-1993) (2001)
Jesús Leguiza (2001-2002)
Rafael Delpech (2002)

Ciudad de Buenos Aires, Junio 2011

Resumen ejecutivo

- I. Introducción.
- II. Importancia del sector agropecuario y del sistema agroalimentario y agroindustrial.
- III. Tareas pendientes, urgentes e importantes.
- IV. Nueva visión del desarrollo rural.
- V. Objetivos de la política agropecuaria y rural.
- VI. Las principales políticas públicas.
 - VI.1 La tecnología y la innovación
 - VI.2 Política de comercialización de productos agropecuarios
 - VI.3 Política impositiva
 - VI.4 Negociaciones internacionales
 - VI.5 Infraestructura de transporte, almacenamiento y riego
 - VI.6 Sustentabilidad de los recursos naturales agropecuarios
 - VI.7 Nuevos productos estratégicos. El caso de la bioenergía
 - VI.8 Agricultura familiar
 - VI.9 Fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria
- VII. Reflexiones finales.

Anexo: Repercusiones iniciales

El sector agroindustrial de Argentina tiene un enorme potencial de crecimiento basado en la excelente dotación de recursos naturales, así como en la capacidad empresarial para la incorporación de innovaciones tecnológicas y organizacionales para aumentar la producción, agregar valor y mejorar la competitividad, es decir crecer significativamente y en forma sostenida.

El escenario internacional favorable del comercio mundial de alimentos, fibras y biocombustibles brinda una oportunidad histórica para aprovechar al máximo dicho potencial y contribuir al crecimiento de la producción y del empleo del país. Estas circunstancias no están siendo plenamente aprovechadas, por la vigencia de una visión arcaica y equivocada, que percibe a la agricultura argentina como un sector no tecnificado y limitado a generar rentas naturales, que no tiene en cuenta los eslabonamientos y complejas tramas que caracterizan al sistema agroindustrial moderno. Ello se refleja en políticas que han limitado su crecimiento y, con ello, el desarrollo económico y social sustentable y equilibrado de Argentina, especialmente del interior del país, el territorio.

Las profundas transformaciones registradas en las cadenas agroindustriales a partir de los años noventa, con aumentos notables de productividad, el uso creciente de mejoras genéticas, fertilizantes, agroquímicos y otras tecnologías modernas destinadas a lograr un mejor aprovechamiento de los recursos naturales -incluida la agricultura de precisión-, así como los desarrollos en la provisión de insumos, en la agroindustria procesadora de la producción primaria y en los cada vez más exigentes servicios requeridos para la producción, cosecha, transporte y comercialización que han dado lugar a nuevas formas de organización de la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos y otros bienes agroindustriales, destacan la necesidad de plantear una nueva visión y políticas acordes.

Una visión que permita superar las concepciones erróneas que hoy tiene gran parte de la sociedad, que no reconoce la importancia estratégica para: i) el crecimiento económico sostenido y el desarrollo territorial; ii) la generación de empleo genuino en las distintas etapas de las cadenas productivas; iii) el fortalecimiento del entramado económico y social que involucra a más de 400 mil PYMES de capital nacional; y, iv) la generación de un balance neto muy positivo de divisas, necesario para compensar el déficit que genera el resto de las principales actividades económicas. Es decir, una visión que contemple adecuadamente al complejo agroindustrial y de servicios que puede contribuir en forma significativa al desarrollo nacional equilibrado deseado por todos. Nuestra propuesta está dirigida a promover la concertación de Políticas de Estado que promuevan el desarrollo económico y social sostenido del sistema agroindustrial, y que se reconozca como uno de los pilares fundamentales de toda la economía argentina.

Entre los principales lineamientos de dichas políticas se propone:

* Impulsar la generación y adopción de tecnología como motores del crecimiento y la transformación productiva, reconociendo la importancia estratégica de la biotecnología. Ello implica aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo, crear un contexto propicio para aumentar sensiblemente la inversión privada y mejorar la articulación con el sistema científico, como está ocurriendo en los principales países competidores.

* Establecer una política de comercialización y de precios transparente y predecible, que fomente la competencia y el buen desempeño de los mercados de productos agropecuarios, que promueva las inversiones y el incremento de la producción. Eliminar las restricciones a las exportaciones.

Impulsar una política impositiva agropecuaria que se aparte de los impuestos que penalizan la inversión y el aumento de la productividad y que contribuya a incrementar de manera sostenida la oferta, satisfaciendo las necesidades genuinas de recaudación, locales y nacionales. Se propone la eliminación gradual de las retenciones (impuestos a las exportaciones) y su sustitución por los impuestos aplicados al resto de la economía.

* Participar activamente en las negociaciones internacionales que impulsen un comercio mundial sin barreras a la producción agropecuaria y que ubiquen al país como proveedor confiable y responsable de alimentos, fibras y biocombustibles. Mejorar el acceso a los mercados de mayor importancia mediante una estrategia ofensiva en materia de tratados de libre comercio y la creación de una agencia relevante de promoción del comercio exterior.

* Promover la producción de biocombustibles, incluyendo los futuros desarrollos de segunda generación, cuidando de lograr un adecuado equilibrio en el uso de los recursos naturales disponibles.

* Mejorar la infraestructura de transporte, almacenamiento y de riego en apoyo a la integración territorial, a la mejora de la competitividad y al aumento de la producción del sector. Ello implica recuperar y fortalecer el transporte ferroviario de granos y otros productos agropecuarios, desarrollar el transporte fluvial y garantizar la transitabilidad permanente de los caminos nacionales y rurales. Coordinar las políticas de infraestructura nacional y provinciales mediante la creación de un Consejo Federal de Infraestructura Rural.

* Diseñar y ejecutar, en acuerdo con las provincias, las medidas que garanticen la adecuada utilización y preservación de los recursos naturales renovables. Establecer un marco federal de políticas de conservación de suelos y agua, como también promover las buenas prácticas agrícolas en el uso de dichos recursos e insumos.

* Diseñar y ejecutar políticas específicas de apoyo a la agricultura familiar que faciliten el acceso al crédito, a la asistencia técnica y a los mercados de productos e insumos mediante nuevas formas de organización.

La implementación de programas especiales para pequeños agricultores y las comunidades rurales.

Las necesidades de la agricultura familiar deben ser un elemento central para establecer las prioridades de inversión en infraestructura de caminos rurales, de electrificación comunicaciones educación y salud.

Oportunidades productivas e infraestructura social y de apoyo a la producción son instrumentos fundamentales para limitar la migración rural-urbana que se ha manifestado como tan traumática por décadas.

- Fortalecer y consolidar una estructura institucional del sector público agro-industrial acorde con la relevancia y complejidad de las Políticas de Estado propuestas.

I. Introducción

El presente documento es un aporte para discutir y acordar políticas que impulsen el desarrollo sostenible del sector agropecuario y de las áreas rurales, la creación de empleos genuinos, el equilibrio territorial y, en definitiva, el desarrollo nacional deseado por todos.

Se propone una nueva visión que reconozca la existencia de un sistema agroalimentario y agroindustrial que tiene una amplia base territorial y un gran potencial de crecimiento de la producción y del empleo, con creciente aporte neto de divisas, componentes claves para la economía en su conjunto. Con esta visión se pueden instrumentar políticas que aprovechen todo el potencial del sector agropecuario para contribuir al desarrollo económico y social del país, teniendo en cuenta la existencia de un contexto internacional sumamente auspicioso para la producción de alimentos y que se estima continuará durante las próximas décadas. Dichas políticas serán el eje central para concretar avances sustanciales en los temas de desarrollo nacional pendientes de solución.

La visión propuesta toma en conjunto a las relaciones multisectoriales que se establecen a partir de la producción agropecuaria primaria y subraya el aspecto territorial, lo que resulta particularmente importante de reconocer en un país que aspira a ser genuinamente federal.

Esta visión es necesaria para superar las concepciones erróneas que no han advertido la importancia central del sistema agroalimentario y agroindustrial para generar empleos y que todavía hoy se imaginan un sector agropecuario limitado a recoger rentas naturales, escasamente tecnificado y vinculado al resto de la economía y de la sociedad a partir solamente del aporte de divisas y de ingresos fiscales.

El contexto internacional favorable, como ya se mencionó, ofrece una excelente oportunidad para la tecnificación y el aumento de la productividad de la agricultura, que permitan mejorar la competitividad de la producción y enfrentar eventuales escenarios internacionales menos favorables.

II. Importancia del sector agropecuario y del sistema agroalimentario y agroindustrial.

La producción agropecuaria ha sido, y es, uno de los pilares de la economía argentina. Sin embargo, y como consecuencia de circunstancias nacionales e internacionales, a mediados del siglo pasado se instaló en el imaginario colectivo y en el pensamiento económico una imagen distinta.

A la agricultura le quedó reservado el papel de sector dudoso y hasta perjudicial en el escenario político de nuestro desarrollo económico y social. Esto ha llevado a no reconocer lo que ya es: el principal conglomerado productivo y altamente competitivo del país en su conjunto y de la mayoría de sus regiones, pese a todas las dificultades generadas por políticas desacertadas. Los vínculos en cadenas, hacia atrás y hacia adelante, así como los horizontales en cuestiones cruciales tales como ciencia y tecnología, existen y podrían potenciarse ante políticas que se correlacionaran positivamente con el potencial nacional. Sin embargo dichos vínculos son oscurecidos por un convencimiento mayoritario que obliga a tener mucho coraje para atreverse a jerarquizar a la agricultura como uno de los ejes estratégicos del desarrollo nacional.

Independientemente de las percepciones erróneas que pueda haber, las tablas de insumo producto, parte de las Cuentas Nacionales, permiten subrayar que el sector agropecuario es uno de los sectores productivos con mayor capacidad para generar ingresos y empleos directos e indirectos en toda la economía. El sistema agroalimentario y agroindustrial, que integra a la producción agropecuaria en una compleja trama de actividades previas y posteriores a dicha producción, es un pilar del desarrollo de Argentina. Este sistema genera en forma directa no menos del 20% del PBI, así como más del 55% de las exportaciones. Tomando en cuenta sus efectos sobre otras actividades y sobre el consumo, las cadenas agroindustriales que integran el sistema aportan al fisco más del 35% de la recaudación total, es decir una contribución mucho mayor a su participación en el PBI.

Quizás tan importante como destacar el reconocido aporte del sistema a las exportaciones y la recaudación fiscal, sea detenerse en su papel en la generación de empleo. Diversas estimaciones han calculado que el empleo en las cadenas agroalimentarias y agroindustriales; va desde el 20 hasta el 35% del empleo total del país, según las metodologías de cálculo del empleo

indirecto. Este rango de diferencias en las estimaciones solamente podría aclararse con acceso a la más reciente Tabla de Insumo Producto, todavía no disponible públicamente.

Las diferencias señaladas no pueden oscurecer que:

- La importancia estratégica de este sistema centrado en la producción, agropecuaria y movilizado a partir de ella son hechos innegables, constituyendo una de las mejores opciones de crecimiento y desarrollo equilibrado del país;
- el sistema genera un número de empleos significativo, que no puede ignorarse mediante cálculos que se limiten a la estricta utilización de mano de obra en la producción primaria;
- la mencionada capacidad de crecer y absorber empleo es financiera y fiscalmente sostenible dado que, en vez de requerir subsidios, el sistema ha subsidiado y subsidia al resto de la economía y de la sociedad;
- la extensa cobertura geográfica del sistema fortalece la integración territorial y sus efectos positivos repercuten en la actividad económica y en el empleo en todo el territorio nacional;
- el sistema agroindustrial incluye más de 400.000 empresas que, en su gran mayoría, son PYMES y representan una amplia fracción del empresariado nacional.
- vista la importancia del sistema agroalimentario y agroindustrial y el papel que en él tiene la producción agropecuaria, urge acordar una clara visión sobre lo agropecuario y lo rural, a efectos de generar políticas que optimicen las contribuciones de todo el sistema al desarrollo nacional.

Dicha visión debe partir del reconocimiento de la evolución que ha tenido la actividad agropecuaria. El crecimiento sectorial y, por consiguiente, del sistema agroalimentario y agroindustrial en su conjunto, se aceleró notoriamente en las últimas dos décadas como resultado de innovaciones tecnológicas, organizacionales y empresariales.

En consecuencia, se obtuvieron aumentos espectaculares en la producción de granos y productos procesados; se registraron cambios muy importantes en algunas actividades en aspectos tales como, calidad del producto, valor agregado y volumen exportado. Los casos más notables fueron en la avicultura, la vitivinicultura, la olivicultura, la producción cítrica y algunos frutos de pepita.

Si bien en algunos casos, como en el algodón, la modernización estuvo asociada a la reducción de empleo por el uso de cosechadores, esto no afectó en las principales cadenas.

Se ha estimado que el crecimiento y las nuevas formas de organización de la agricultura implicaron un aumento notable de las inversiones, en el área cultivada y en la producción, y generaron 200.000 empleos directos adicionales durante el período 1993-99. Los efectos positivos sobre el empleo total incluyeron aquellos generados por los crecientes servicios agropecuarios, el transporte, almacenamiento y la propia actividad agroindustrial.

La producción agrícola tuvo un nuevo impulso a partir de los años 2002-2003 en base a un dólar alto, resultante de la crisis del año 2002, de una política expresa de “dólar caro” y del posterior incremento de los precios internacionales.

Estos resultados positivos más recientes no se produjeron en todo el sector, ya que la ganadería vacuna declinó sustancialmente a causa de políticas que deprimieron los precios internos hasta poco después de la gran sequía de 2008. El stock ganadero cayó en unos 12 millones de cabezas y hoy está cerca del 20% por debajo del nivel del año 2006. Por su parte, la producción de lácteos cayó 20% entre 1999 y el año 2003, recuperando recién en 2009 el nivel que había logrado 11 años atrás.

En síntesis, la experiencia de la última década indica que existe una situación favorable en algunos rubros del agro en los que la Argentina es muy competitiva y han podido sobrellevar los efectos negativos de las retenciones a las exportaciones y de otras políticas de regulación del mercado adversas a la producción.

III. Tareas pendientes, urgentes e importantes

1. Como consecuencia de una política comercial inadecuada, se perdieron y se continúa perdiendo oportunidades para aprovechar plenamente las condiciones del mercado internacional, no pudiéndose expandir al máximo la producción. Las oportunidades perdidas se ponen especialmente en evidencia en la comparación con la ganadería de los países vecinos. La declinación reciente de la ganadería debe compararse con incrementos de la producción del 20% en Uruguay, del 31% en Paraguay y del 42% en Brasil, todos durante la última década.

2. La ganadería bovina, la producción láctea y de trigo son ejemplos palpables y bien conocidos de las consecuencias de una intervención desacertada del Estado con el objetivo de regular los precios internos. El resultado final fue la disminución de la producción de trigo y de lácteos y la caída del stock de ganado vacuno y de su producción actual y de los próximos años. El efecto final, contrario a todo lo deseable, fue la disminución de las exportaciones de carne en 70% y el aumento de precios para el consumidor local.

2. En otros casos, como sucede con los frutales y con otros varios productos regionales de alto impacto en el empleo local, las deficiencias de políticas que se han verificado durante años no sólo se centran en políticas explícitamente adversas sino, además, en la ausencia de una estrategia de apoyo que atienda a los problemas estructurales que afecta a la comercialización y al sistema productivo.

3. En material de los cereales y oleaginosas, un marco más favorable de políticas y de inversiones en tecnología e infraestructura hubiera resultado en producciones y exportaciones más acordes con el potencial productivo del país y con las condiciones favorables del mercado internacional. Como ejemplo, si se liberara el comercio de cereales y oleaginosas, la producción podría aumentar un 50% y así llegar a los 150 millones de toneladas en una década. Una expansión de esta magnitud tendría muy claros efectos en el progreso del interior, la generación de empleo directo e indirecto, el desarrollo de PYMES de servicios y en un fuerte aumento de las exportaciones y, por ende, de la recaudación fiscal.

4. Se carece de una visión de largo plazo y se instrumentan políticas diseñadas con fines fiscales, dedicadas a captar parte de un beneficio que solamente puede ser generado por las explotaciones más grandes y más tecnificadas. Esta falta de visión de largo plazo es una de las causas del abandono del interior, al impedir el desarrollo y la capitalización de productores con explotaciones de menor tamaño, o localizados en regiones más alejadas de los puertos y con peores condiciones agroecológicas y productivas que las existentes en la región pampeana. Esta penalización ha sido un factor central que explica la amplitud de la reciente movilización política de los productores rurales y del interior en su conjunto.

5. No existe una política clara y activa de inversiones públicas en el territorio de todo el país que se integre a una política agroalimentaria y agroindustrial de desarrollo rural de largo plazo, tanto en el área de la infraestructura física (expansión del riego, almacenamiento, de la red de ferrocarriles y caminos rurales), como en la atención de la educación, la salud, la vivienda y otros servicios sociales. Esto ha causado un retraso relativo del “interior” y la continuación de un largo proceso de migración rural-urbana, que ha concentrado un tercio de la población del país en el Gran Buenos Aires (y casi el 50% de la población localizada en media docena de centros urbanos). Ello ha dado lugar al surgimiento de bolsones de pobreza y desempleo en la periferia de esas grandes ciudades.

7. Los resultados indeseables de concentración y pobreza urbana se explican también por políticas macroeconómicas y comerciales que discriminaron en contra del sector agropecuario, especialmente de las regiones más alejadas de los puertos. Las políticas adversas limitaron la capacidad de las economías regionales para retener el incremento de la población en empleos directos o vinculados al sistema agroalimentario y agroindustrial, y así generar los consiguientes beneficios para la estructura económica y social local.

8. La existencia de una legislación laboral obsoleta y sujeta a escaso control de aplicación genera episodios de desamparo de trabajadores rurales, especialmente de los temporarios que se desplazan acompañando a las distintas zafras y en distintas épocas.

Estos son los desafíos más importantes que consideramos necesario enfrentar con estrategias e instrumentos para el desarrollo rural territorial, con la convicción de que el sistema agroalimentario y agroindustrial es uno de los pilares clave del desarrollo del país. Es decir que el elemento central a ser acordado por las fuerzas políticas es un conjunto de Políticas de Estado que brinden estabilidad y seguridad a la producción y el comercio asociado a ella.

IV. Nueva visión del desarrollo rural

La visión propuesta concibe un sistema que excede a la actividad agropecuaria primaria, incorpora tanto a los vínculos económicos previos a dicha producción como a las actividades industriales posteriores a ella. Entre los vínculos previos a la producción, se incluyen la producción y el mantenimiento de maquinarias y bienes durables, el desarrollo de mercados financieros, la provisión de mano de obra, de servicios varios y de insumos tales como semillas, fertilizantes y productos sanitarios, así como la transferencia de tecnología y de otras informaciones especializadas.

Entre los vínculos posteriores a la producción primaria se destacan la comercialización, el procesamiento agroindustrial y el transporte en sus diversas formas. A estos eslabonamientos verticales “hacia adelante” y “hacia atrás” de la producción primaria corresponde agregar las relaciones horizontales con sistemas tales como los de generación de conocimiento y con todo el complejo de relaciones económicas y sociales de cada medio local.

Esta nueva visión postula una perspectiva territorial. Al reconocimiento de los vínculos entre lo agropecuario y una importante gama de actividades productoras de bienes y servicios se agrega el componente territorial, porque lo agropecuario es la base de la actividad económica en la mayor parte de la geografía nacional y, en consecuencia, influye decisivamente en el desarrollo del interior del país.

En el territorio se integran espacios rurales y urbanos a través de la oferta y demanda de bienes y servicios económicos y culturales. Los sistemas productivos interactúan con centros de mayor densidad poblacional que brindan el soporte institucional, económico y social a la producción.

Alrededor del 70% del país está ocupado por territorios donde la producción agropecuaria es la base productiva. Un tercio de la población vive en ciudades de menos de 100.000 habitantes y el desarrollo económico, institucional, social y político de estas ciudades está basado en el crecimiento y progreso del sistema agroalimentario y agroindustrial. Esta situación es generalizada con excepción de algunos enclaves turísticos, siderúrgicos, portuarios o mineros.

La nueva visión requiere que las poblaciones locales y sus dirigentes reconozcan la importancia del efecto de los flujos económicos de este sistema en su territorio y de las actividades que le dan vida. El reconocimiento del rol del empleo local en la corrección de los desequilibrios territoriales es fundamental para conformar una nueva visión que lleve a definir políticas compartidas por la sociedad en su conjunto. La generación de empleo local rural y de los pequeños centros urbanos, a partir de transformaciones tecnológicas y económicas del sistema agroalimentario y agroindustrial, es necesaria para un mejor equilibrio poblacional en el territorio nacional.

Como resultado del continuo mejoramiento tecnológico, es previsible que el efecto agregado sobre el empleo en todo el sistema compense holgadamente la reducción de mano de obra no calificada por unidad de superficie que pueda experimentar en algunos casos la producción primaria. Una ilustración de este potencial para generar empleo surge de estimaciones realizadas a través de la Tabla de Insumo-Producto de las Cuentas Nacionales, que indica que un incremento del 50% de la producción de cereales y oleaginosas generaría entre 220 y 240 mil empleos en los distintos eslabones de esas cadenas en el término de una década. Esta cifra puede ser contrastada con los 11.000 empleos adicionales que generó la industria automotriz (terminales y autopartes) durante el período 1998-2008, cuando la producción aumentó también 50%.

La necesidad de lograr una mayor y mejor oferta de puestos de trabajo, complementada con los necesarios aspectos educacionales, de servicios públicos y sociales, de salud y vivienda, sugiere adoptar una visión de desarrollo rural territorial. Un desarrollo rural basado en el crecimiento de la producción agroalimentaria y agroindustrial es imprescindible para reducir la pobreza rural y del interior, donde se concentra la mayor parte de la pobreza total del país, y para reducir los flujos poblacionales hacia los centros urbanos. También en este aspecto se suelen advertir percepciones erróneas acerca de dónde se encuentra la mayor parte de la pobreza; debe notarse que, los censos oficiales muestran que el número de pobres que habitan en el NEA y NOA es superior al correspondiente a los grandes centros urbanos y sus periferias en la Región Pampeana.

Todo lo mencionado nos lleva a afirmar que la política económica y social de la Nación para el sistema agroalimentario y agroindustrial debe ser un componente central de la política nacional.

Es importante destacar que las políticas públicas que se proponen no requieren de inversiones adicionales significativas, excepto las que se refieren a la infraestructura física. Por otra parte, los incrementos de producción resultantes de las mismas generarán mayores ingresos públicos y un mayor bienestar general.

V. Objetivos de la política agropecuaria y rural

Nuestra propuesta considera que las políticas para el sistema agroalimentario y agroindustrial son un componente central de una estrategia nacional de crecimiento económico sustentable con equidad social y territorial.

En el marco de la estrategia nacional, las políticas que se proponen para el sistema agroalimentario y agroindustrial tienen los siguientes propósitos:

- Contribuir al crecimiento económico con mayor generación de valor agregado;
- Contribuir en forma significativa a la generación de empleo sostenible;
- Constituir un eje central del desarrollo regional y de la integración territorial;
- Continuar satisfaciendo la demanda interna de alimentos y aportando divisas;
- Reforzar la inserción internacional de la Argentina en una economía mundial crecientemente competitiva;
- Asegurar la sustentabilidad ambiental y la conservación de los recursos naturales;
- Contribuir al bienestar de la población rural y de los pequeños centros urbanos del interior del país.

Los avances en el logro de estos propósitos requerirán intensa coordinación multisectorial y territorial, así como establecer y sostener en el tiempo Políticas de Estado orientadas a:

1. Impulsar de manera creciente los procesos de generación y adopción de tecnología como motores del crecimiento y de la transformación productiva, dando especial reconocimiento a la importancia estratégica de la biotecnología.
2. Establecer una política de comercialización y de precios transparente que fomente la competencia en los mercados mayoristas y minoristas, favoreciendo las inversiones, el incremento de productividad y atendiendo a satisfacer las necesidades de consumo de los grupos sociales más vulnerables.
3. Evolucionar hacia una política impositiva que se aparte de impuestos que penalizan la inversión y la productividad;

Como también, que apunte a incrementar de manera sostenible la oferta de bienes del sistema agroalimentario y agroindustrial, al tiempo que satisfaga las necesidades genuinas de recaudación, locales y nacionales.

4. Participar activamente en las negociaciones que impulsen un comercio mundial sin barreras a la producción agropecuaria, como reflejo de las políticas internas que ubiquen al país como proveedor confiable y responsable de alimentos y demás productos de las industrias que integran el sistema agroalimentario y agroindustrial.

5. Promover actividades que incrementen de manera competitiva y sostenible la oferta de nuevos productos, tales como la bioenergía, cuidando de lograr un adecuado equilibrio en el uso de los recursos naturales disponibles.

6. Mejorar la infraestructura de transporte, almacenamiento y de riego en apoyo a la integración territorial, al aumento de la producción y a la mejora de la competitividad del sector.

7. Diseñar y ejecutar las medidas que garanticen la adecuada utilización y preservación de los recursos naturales renovables y que, en particular, preserven la cantidad y la calidad de los suelos y de las aguas.

8. Diseñar y ejecutar políticas específicas de apoyo a la agricultura familiar.

9. Fortalecer y consolidar una estructura institucional para el sector público agroindustrial acorde con la relevancia y complejidad de las Políticas de Estado propuestas.

VI. Las principales políticas públicas

VI.1 La tecnología y la innovación

Recomendaciones

1. Aumentar sustancialmente la inversión pública en Investigación y Desarrollo, especialmente con incrementos de los fondos concursables. En un plazo breve es necesario duplicar los actuales niveles de inversión pública sectorial para alcanzar el 1% del Producto Agroindustrial y niveles similares a nivel global para atender adecuadamente a los desarrollos de la biotecnología, las tecnologías de información y otras tecnologías de carácter horizontal que resultan estratégicas para la mejora sistemática de la competitividad del sector.

2. Promover un aumento significativo de la participación privada con aportes para inversiones en la investigación y el desarrollo agrícola, a partir de un marco institucional y normativo que contemple:

- Su articulación con el sistema público;
- El respeto de la propiedad intelectual de las innovaciones;
- La seguridad jurídica de las inversiones.

3. Resolver las incertidumbres y desincentivos que genera el contexto actual, especialmente en el caso de las semillas. Fortalecer la capacidad operativa del Instituto Nacional de Semillas (INASA) y de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) y redefinir la estrategia de bioseguridad para recuperar la vanguardia perdida en materia de los productos de la biotecnología.

4. El sistema público debe instrumentar una agenda de investigación y desarrollo más diversa y compleja que la desarrollada hasta el presente, que no sólo contemple los aumentos en la productividad y la competitividad sino que también otorgue prioridad a promover un mejor uso de los recursos naturales en forma sostenible (bienes públicos).

Fundamentos

La política científica y tecnológica constituye un componente esencial de una Política de Estado en materia agroindustrial, que asigne una suficiente prioridad al aumento de la productividad, al uso sostenible de los recursos naturales y a la protección del medio ambiente.

El sistema argentino presenta interesantes fortalezas, tales como: el alto grado de desarrollo de la estructura institucional de Investigación y Desarrollo Agrícola (IDA) público; la existencia del INTA, entidad de reconocido prestigio internacional y nacional; la participación creciente del Ministerio de Ciencia,

Tecnología e Innovación (MINCyT) con fondos concursables para el apoyo de proyectos públicos y privados de IDA; la incorporación a partir de los años '90 de diversos programas y proyectos de extensión y desarrollo rural por parte de la SAGPyA; el grado de madurez y eficacia alcanzado por las organizaciones y las empresas privadas vinculadas a la IDA; así como el hecho de que los usuarios de la tecnología han evolucionado de una manera notable en las últimas décadas, adoptando rápidamente las innovaciones e interactuando de forma pro-activa con el sistema de IDA.

También se observan debilidades tales como los bajos niveles de inversión pública y privada; falta de articulación entre los distintos participantes públicos y privados y la existencia de modelos de gestión institucional que no se promueven; deficiencias en el marco institucional y normativo requerido para inducir una mayor inversión privada; escasa investigación y desarrollo en aspectos de importancia creciente, como el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente, el agregado de valor en las distintas etapas de las cadenas agroindustriales, las innovaciones organizacionales, entre otras.

Es de notar que la Argentina tuvo un liderazgo regional con la creación del INTA y sus desarrollos durante los años sesenta a ochenta; hoy el EMBRAPA de Brasil nos ha superado notablemente con desarrollos propios y articulaciones con el sector privado para el desarrollo de tecnologías de avanzada. En la década de 1990 la Argentina tuvo un nuevo liderazgo regional y mundial en la utilización de la biotecnología agrícola; esta posición se ha ido perdiendo a favor de Brasil, India, China y otros países, por lo que es urgente revisar las normativas y contextos para recuperar la posición perdida.

La evolución reciente de la investigación y desarrollo a nivel mundial manifiesta una participación creciente del sector privado, por lo que no basta con aumentar los presupuestos públicos -que son extremadamente bajos-, sino que además se debe crear el ambiente propicio para promover la inversión privada, la vinculación y cooperación entre los distintos participantes públicos y privados, tanto del sistema nacional como internacional de investigación y desarrollo. Asimismo, la importancia estratégica de las nuevas tecnologías, tales como la biotecnología, involucra a todo el sistema científico y no sólo a la actividad agroindustrial. El desafío, entonces, es lograr una eficiente articulación de todo el sistema público-privado, replanteando los modelos de planificación y gestión vigentes en el INTA, el INTI y las demás instituciones; y, creando mecanismos y condiciones tendientes a promover la participación y la inversión privada.

VI. 2. Política de comercialización de productos agropecuarios

Recomendaciones

1. Dar transparencia y promover la competencia en la comercialización externa e interna de productos agropecuarios, mediante la adopción de reglas claras y estables que reemplacen el ejercicio arbitrario de la autoridad administrativa.
2. Eliminar las restricciones a las exportaciones.
3. Promover la modernización del proceso de comercialización de los productos agropecuarios (por ejemplo instrumentando de manera inmediata en las grandes ciudades y progresiva en el resto del país de, la Ley Federal de Carnes N° 22.375).
4. Esclarecer a la opinión pública sobre la naturaleza del proceso de formación de precios de los productos que utilizan insumos agropecuarios con el objeto de corregir la equivocada percepción de que el aumento de los precios de los productos primarios se traslada en igual proporción a los productos finales (por ejemplo: trigo-pan), asignando indebidamente al productor agropecuario la responsabilidad principal del encarecimiento del costo de vida. Esto se vuelve especialmente relevante en un ambiente inflacionario.

Fundamentos

Con el propósito de promover la transparencia y competencia en la comercialización, el principal organismo de regulación e intervención en el mercado agropecuario fue la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), creado en el año 1996 para “fiscalizar el estricto cumplimiento de las normas de comercialización en el sector agropecuario, a fin de asegurar un marco de transparencia y libre competencia para estas actividades...”. A partir de mayo del año 2006, las crecientes intervenciones estatales en el comercio de carnes, granos y lácteos (cierres transitorios y otorgamiento de cupos de exportación y utilización de “compensaciones”, junto a la creación de un Registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior, que incluye a todos los granos) fueron responsabilidad de la ONCCA, organismo que ha sido recientemente reemplazado por otro de similares características. En el último quinquenio, tanto la comercialización interna como externa de granos, carnes y lácteos han sido distorsionadas como consecuencia de intervenciones oficiales crecientes, cambiantes e imprevisibles. Estas intervenciones han creado sobrecostos en el sistema comercial y debilitado la presencia argentina en mercados mundiales y, en consecuencia, han afectado negativamente a la producción.

La creación de un complejo y costoso sistema de subsidios a determinados procesos y producciones, así como la escasa transparencia de dicho sistema, han agravado los resultados negativos. Por otra parte, la Argentina enfrenta un importante desafío: modernizar la comercialización interna de carne bovina, que continúa basándose en una forma de faena antigua que, por deficiencia en los estándares comerciales y sanitarios, impide que la carne tenga la posibilidad tanto de comercializarse más eficientemente en el mercado interno como de acceder a los mercados externos donde se cotizaría con premio.

A diferencia de lo que ha ocurrido con la industria láctea, el procesamiento de la carne bovina no se ha modernizado, con la consecuente subvaloración del producto final por falta de diferenciación de los cortes y de los mercados de destino.

Con relación a la necesidad de esclarecer mecanismos de formación de precios, se verifica que la participación del insumo en el precio final tiende a disminuir a medida que los productos y los sistemas de distribución y comercialización son más sofisticados. Esto implica que los cambios en la eficiencia del sistema de procesamiento, comercialización y distribución tienen hoy mayor importancia para los consumidores que los cambios en la eficiencia de la producción, consecuentemente, en los precios de los productos primarios.

Carece de sustento racional pensar que un cambio, positivo o negativo, del precio del producto primario (trigo, por ejemplo) se traslade, en igual magnitud, al precio del producto final (pan). Cuando existe inflación, todos los precios tienden a ajustarse hacia arriba. Así, si el precio de la harina de trigo aumentara 20%, el precio del pan probablemente aumentaría en la misma proporción, pero no como consecuencia del aumento en el precio de la harina sino del marco macroeconómico inflacionario.

VI. 3 Política impositiva agropecuaria

Recomendaciones

1. Reducir gradualmente las retenciones a las exportaciones hasta su eliminación. Compensar parcialmente la disminución en la recaudación fiscal con un anticipo del Impuesto a las Ganancias, imputable a cuenta del mismo.
2. En el mediano y largo plazo el sector agroalimentario debe tributar con la misma estructura de impuestos nacionales coparticipables aplicada al resto de los sectores económicos. Se debe concentrar la recaudación fiscal nacional en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. Para ello los impuestos a las exportaciones agropecuarias (retenciones) deben ser sustituidos por dichos impuestos coparticipables y que carezcan de efectos depresivos sobre la producción.
3. Incrementar los ingresos fiscales de las provincias y municipios. Ello ocurrirá como consecuencia del aumento de la recaudación de los impuestos nacionales coparticipables y de los impuestos provinciales, asociados, en ambos casos, a los mayores ingresos agropecuarios resultantes de la disminución y posterior eliminación de las retenciones. Asimismo, la recaudación proveniente del impuesto inmobiliario podrá incrementarse como consecuencia de los aumentos registrados en los precios de la tierra.
4. De acuerdo a lo prescripto por la Constitución Nacional, recordar que todos los impuestos nacionales deben ser establecidos por una ley de la Nación.

Fundamentos

Las principales lecciones que emergen de la experiencia de la aplicación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias a lo largo de medio siglo constituyen una permanente fuente de conflicto en las relaciones entre los productores agropecuarios y el gobierno nacional.

Las retenciones son un impuesto “desgastado” en el sentido de que ha causado repetidos conflictos entre los sucesivos gobiernos y el sector agropecuario, absorbiendo excesivas energías durante demasiado tiempo.

La crisis de 2008 no ha sido más que la culminación de este prolongado enfrentamiento, cuya resolución tendría indudablemente altos retornos políticos, económicos y sociales. Por otra parte, se trata de un impuesto que quita competitividad a la producción y prácticamente ha sido desechado por los principales competidores de Argentina.

A su vez las retenciones son una modalidad cómoda y segura de recaudación de impuestos nacionales, pero que operan en detrimento de una mejor utilización de los recursos productivos y, en consecuencia, de la generación de mayores producciones y de sus efectos multiplicadores del empleo y en el crecimiento de la economía argentina.

Las retenciones son impuestos no coparticipables, de acuerdo a la Constitución Nacional, que reducen los precios e ingresos agropecuarios y por ende disminuyen los impuestos municipales, provinciales y nacionales coparticipables; es decir son un impuesto anti-federal, que concentra el poder político del PEN, situación ésta que se considera indeseable.

La experiencia histórica y reciente muestra que las retenciones no han sido un instrumento idóneo para reducir la inflación, que es atribuible esencialmente a las políticas macroeconómicas y fiscales. Se corre el riesgo, no menor, de que la persistencia de estos impuestos desacelere, o incluso interrumpa, la fuerte expansión de la agricultura característica del último medio siglo y que se acentuó sensiblemente a partir de las reformas instrumentadas a comienzos de los años noventa; entre otras, la disminución de aranceles de importación, la eliminación de las retenciones y de importantes cambios tecnológicos y organizacionales en la producción ocurridos desde entonces, de modo que resulta prioritaria la búsqueda de soluciones fiscales alternativas, que sustituyan a las retenciones, que no tengan efectos depresivos sobre la producción, ni que generen el rechazo político en las provincias y en el sector agropecuario.

La sustancial valorización de las tierras agropecuarias es un fenómeno estructural, que se verifica desde mediados de los años '90 a nivel mundial y ofrece la posibilidad de articular modificaciones en el sistema impositivo agropecuario, trasladando parcialmente el peso de las retenciones a los impuestos inmobiliarios provinciales y al impuesto a las ganancias.

VI. 4 Negociaciones internacionales

Recomendaciones

1. Aprovechar el excelente contexto internacional para posicionar con fuerza a la Argentina como un proveedor confiable y relevante de alimentos; y biocombustibles, asumiendo una posición constructiva y de liderazgo en los principales foros mundiales, en particular el G20.
2. Cambiar el enfoque defensivo que ha caracterizado a la estrategia comer-

cial reciente de Argentina por una opción ofensiva que prioricé las oportunidades que brindan las asociaciones comerciales con los grandes bloques o países del mundo, mediante Tratados de Libre Comercio (TLC).

Ello implica definir una estrategia de largo plazo y una agenda de negociaciones regionales-bilaterales con los mercados más relevantes para el país. Concluir el Acuerdo MERCOSUR-Unión Europea.

3. Insistir en el cierre de la Ronda de DOHA a la brevedad, aunque lo logrado sea un acuerdo menos satisfactorio que lo originalmente ambicionado, evitando así el riesgo de terminar sin acuerdo alguno.

4. Crear una Agencia de Promoción del Comercio Exterior significativamente más ambiciosa que la Fundación Exportar, dándole una magnitud similar a las organizaciones que existen en países tales como Australia, Chile, Nueva Zelanda o Irlanda. La creación de esta agencia complementaría la agresiva agenda de negociaciones comerciales que se recomienda.

Fundamentos

En cuanto al posicionamiento internacional, la Argentina ha ido perdiendo relevancia en el contexto internacional en prácticamente todos los foros. En algunos casos no sólo se perdió liderazgo, sino que aparece en el grupo de países que merece críticas en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y otros foros, porque no está contribuyendo, en la escala que podría a atender a los problemas de la alimentación mundial.

El enorme potencial productivo de la Argentina y su ventaja relativa en materia de uso de sus recursos naturales, conservación de la biodiversidad y baja emisión de gases de carbono, brindan una oportunidad histórica para retomar un liderazgo en estos aspectos clave de la agenda de los líderes mundiales para contribuir a resolver problemas globales.

La estrategia defensiva de negociaciones que ha prevalecido recientemente no se corresponde con el reducido tamaño del mercado local, aun considerando al MERCOSUR. Esto plantea la necesidad de contar con una estrategia agresiva de negociaciones comerciales en distintos ámbitos, que permitan mejorar el acceso a los mercados mundiales. Con relación a la ronda Doha de negociaciones multilaterales, se han logrado muy pocos avances en la liberalización del comercio de productos agrícolas; existen asimismo serias dudas acerca de las posibilidades de alcanzar logros significativos en un plazo cercano. Por esta razón continúan vigentes, en muchos países, elevados aranceles de importación y subsidios para productos de interés para la Argentina.

Frente al marco de poco progreso de las negociaciones multilaterales, es necesario intensificar negociaciones a nivel bilateral, es necesario intensificar negociaciones a nivel bilateral, regional o entre países de diferentes regiones, concretados a partir de Acuerdos o Tratados de Libre Comercio (TLC).

La Argentina no ha concluido negociaciones bilaterales regionales con los mercados de mayor potencial, como lo han hecho México, Chile, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros países que han firmado tratados con EEUU, Europa, China, Japón y otros. En la Argentina se ha dado prioridad a evitar las amenazas en lugar de aprovechar las oportunidades que brindan los TLC con los mercados relevantes.

Esto ha resultado en que:

- La Argentina enfrenta mayores barreras de acceso que algunos de sus competidores en mercados relevantes (UE, EEUU, China, Japón);
- Se plantean mayores exigencias de competitividad privada a las cadenas exportadoras, las cuales reciben precios sustancialmente menores a los logrados por los exportadores de países que han firmado tratados; y
- Se pierden los efectos dinámicos de la asociación con países desarrollados que pueden contribuir a mejorar la competitividad local de toda la economía.

No se cuenta con un organismo capacitado para complementar a las negociaciones y ejecutar una estrategia proactiva de crecimiento nacional basado en las exportaciones. El fuerte apoyo de una Agencia de Promoción del Comercio Exterior es imprescindible para viabilizar la participación de las empresas PYMEs y facilitar el acceso a los mercados.

Las alianzas público-privadas para el desarrollo de mercados son un componente esencial de esta estrategia, para mejorar la inteligencia de mercado y para promover el acceso mediante los distintos instrumentos utilizados por los países exitosos en el comercio exterior (plataformas comerciales, campañas comerciales, lobby y otros). Esto implica contar con un presupuesto público sustancialmente mayor al asignado actualmente para estas actividades.

VI.5 Infraestructura de transporte, almacenamiento y riego

Recomendaciones

1. Recuperar y fortalecer el transporte ferroviario de granos y otros productos agropecuarios. Aumentar en forma perentoria y significativa la inversión pública en el sistema y promover la participación de la inversión privada. A la vez, modernizar el parque de camiones cerealeros.
2. Desarrollar el transporte fluvial. Concretar los tres ejes viales transversales: el corredor bioceánico Norte Grande, el corredor Central y el corredor de la Patagonia, para vincular o brindar acceso de los centros productivos nacionales con los puertos argentinos y también de Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil.
3. Garantizar la transitabilidad permanente de los caminos, especialmente rurales, a un costo razonable por kilómetro, y utilizar el financiamiento de las

tasas viales municipales y otros recursos para reducir el aislamiento y el costo de transporte, aumentando la competitividad de los productos agropecuarios provenientes de zonas alejadas de los puertos.

4. Promover el crecimiento de la capacidad de almacenamiento de granos mediante el financiamiento de largo plazo.

5. Incorporar mediante inversiones en riego nuevas tierras al proceso productivo, principalmente para las economías regionales. Una eficaz administración del recurso agua requiere mejorar el funcionamiento de las instalaciones y obras de infraestructura existentes en zonas donde el agua es un recurso escaso (zona Andina) y realizar más obras de infraestructura donde hay excedentes de agua (Litoral y Sur del país).

6. Acordar y poner en práctica una estrategia de desarrollo institucional para coordinar las políticas de infraestructura nacional y provinciales mediante la creación de un Consejo Federal de Infraestructura Rural.

Fundamentos

El principal problema de la Argentina en esta materia es la falta de visión y de estrategia global y de largo plazo. El crecimiento y desarrollo de la infraestructura ha sido casi espontáneo y de acuerdo a oportunidades y necesidades inmediatas.

El parque de transporte automotor cuenta con unos 360.000 camiones. De ellos, 140.000 son graneleros, con una capacidad para 4.200.000 toneladas y tienen una antigüedad promedio de 19 años. Esto se enfatiza en atención a que el 83% del transporte de granos se realiza por camiones, el 15% por ferrocarril y meramente el 2% por barcazas. La existencia de un parque automotor crecientemente insuficiente, junto a la conveniencia de reducir costos unitarios de transporte, plantean la necesidad de aumentar la capacidad de transporte por ferrocarril y por vía fluvial.

Con relación a puertos, accesos y vías navegables, los aumentos productivos que pueden esperarse requerirán la expansión del complejo de 17 puertos del Paraná inferior por donde se embarcan 75 millones de toneladas anuales (casi el 80% de los granos y derivados exportados y la mitad de las exportaciones totales del país). Similares posibilidades de ampliación de la capacidad de carga tiene la provincia de Entre Ríos, con Ibicuy, Diamante, Concepción del Uruguay, La Paz y Puerto Márquez.

La red vial rural está compuesta por alrededor de 650.000 km, en su mayoría de tierra. Los caminos dependen para su mantenimiento de los municipios; y para su construcción y mantenimiento existe una tasa vial. Estos caminos constituyen las arterias principales para la salida de la producción.

La capacidad de almacenamiento de granos es del orden del 75% de la producción, lo que implica una seria restricción para cosechas que superen

significativamente los 100 millones de toneladas, ya que el uso de los silos-bolsa constituye una solución transitoria. En breve plazo es necesario aumentar la capacidad instalada en 30 millones de toneladas, lo que implica una inversión del orden de los 3.000 millones de dólares.

Dos tercios del territorio nacional constituyen zonas áridas o semi-áridas. Los sistemas de riego en zonas áridas, en su mayoría, son derivados de obras de generación de energía. Se estima que existen más de 1,6 millones de hectáreas con disponibilidad de riego, las cuales funcionan con técnicas relativamente ineficientes de gravedad y de inundación. El potencial agrícola irrigable es enorme; en una década se podría duplicar el área actual con riego.

De las 300.000 explotaciones agropecuarias (total nacional), 80.000 utilizan agua de riego. El bajo nivel de eficiencia ha obligado a sobredimensionar los sistemas y ha provocado problemas de salinización y de drenaje. A partir de mediados de los años 90 se iniciaron estudios, proyectos e inversiones para mejorar los sistemas de riego. En la pampa húmeda el riego con agua subterránea es muy importante para asegurar el éxito de los cultivos, aunque se deben regularizar y modernizar las normas legales (Códigos de Agua).

La administración integral del agua requiere atender también a las inversiones de drenaje y control de inundaciones en las zonas donde el potencial productivo es desaprovechado en ciertas épocas del año, por falta de las obras que mejoren la distribución del agua en el tiempo.

La inversión en infraestructura para el desarrollo territorial debe considerar de manera primordial lo necesario en vivienda, salud y educación, favoreciendo el arraigo de población que permita el desarrollo del sistema agroalimentario y agroindustrial.

VI.6 Sustentabilidad de los Recursos Naturales Agropecuarios

Recomendaciones

1. Establecer un marco federal de Política de Conservación de Suelos y Aguas para todas las producciones agropecuarias por las profundas modificaciones producidas por la agricultura, el talado de montes y sobre-pastoreos de pastizales naturales con riesgo de erosión, desertificación y pérdida de biodiversidad. Para la implementación se propone la creación de una Agencia Federal de Conservación de los Suelos y Agua para uso agrícola, con la participación y el concurso de las provincias y en concurrencia con el Ordenamiento Territorial que éstas deben implementar para el uso racional de

los recursos naturales del país.

2. Promover la aplicación de normas de buenas prácticas agrícolas (BPA) en el uso del suelo, aguas e insumos; más siembra directa, agricultura de precisión, manejo integrado de plagas, control del uso de insumos químicos y reposición de nutrientes. Para este propósito es necesario desarrollar un programa de incentivos fiscales.
3. Fomentar el desarrollo forestal, especialmente en tierras susceptibles a la erosión y sin capacidad agrícola.
4. Incrementar significativamente los recursos públicos destinados a generar un mayor conocimiento sobre la capacidad y uso de los recursos naturales, elemento indispensable para poder implementar las recomendaciones anteriores.

Fundamentos

La producción agropecuaria constituye una alteración de los sistemas naturales, con consecuencias en la capacidad de regulación y equilibrio ecológico. Ejemplo de esto son las deforestaciones en una importante área del país de suelos lábiles como San Luis, Córdoba, Chaco, Santiago del Estero y Salta, entre otras provincias, y la expansión del área agrícola en la zona pampeana que ha desplazado a la ganadería de las tierras cultivables y dejado de lado las rotaciones agrícola-ganaderas como reconstituyentes de la estructura y fertilidad de los suelos, situación compensada con la siembra directa. Este proceso de expansión de la frontera agrícola y la sustitución de la ganadería por la agricultura está impulsado por la diferencia de rentabilidad entre ambas actividades, que existió hasta el año 2010, y la canalización de recursos financieros de origen urbano a través de nuevas formas organizativas de la producción agropecuaria que privilegian a empresas de gran dimensión económica y mayor competitividad lograda a través del desarrollo tecnológico y la organización empresarial.

El principal activo del sector son, sin duda, los recursos naturales agrícolas. Su conservación a través de sistemas de producción agropecuaria adecuados debe ser el objetivo estratégico en la política sectorial.

La creación de un marco federal de políticas de conservación de suelos y aguas es un deber pendiente de la Nación. Si bien el ordenamiento territorial y el uso de los recursos naturales son jurisdicción de las provincias, éstos deben ser la base de concurrencia de las acciones entre la Nación, las Provincias y su aplicación a nivel departamental.

El aprovechamiento del agua de riego y el potencial de mayores áreas explotables deben ser realizados en conjunto entre la Nación y las Provincias con cursos de agua de jurisdicciones compartidas. Según estudios del INTA,

se podrían poner bajo riego de 4 a 6 millones de hectáreas adicionales; con el recurso hídrico disponible, incluyendo el uso de aguas subterráneas, lo cual representa casi multiplicar el área irrigada actualmente. Por otra parte, las tecnologías de riego por goteo disponibles constituyen un valioso ejemplo de eficiencia en el uso de un recurso escaso. Su empleo debiera ser fuertemente promovido. El manejo integrado de producción, las tecnologías de posicionamiento satelital y las máquinas de dosificación variable de los agroquímicos y semillas por mapeo, permiten lograr los mismos rendimientos de producción con el uso mínimo y racional de insumos, disminuyendo el impacto en el medio donde se realiza.

También la expansión de la producción de fibras maderables o para papel de 1 millón de hectáreas implantadas actuales a 4-5 millones es una posibilidad que sólo espera las condiciones jurídicas y de inversión para realizarse; son un factor de conservación de suelos y de captura de carbono. La cadena de la madera es una de las actividades que genera más valor y demanda más empleo, su ciclo de corte es la mitad del de países forestales como Finlandia, Suecia y Chile.

VI. 7 Nuevos productos estratégicos. El caso de la bioenergía

Recomendaciones

1. Promover la producción de biocombustibles.
2. Aportar recursos para la investigación y el desarrollo de tecnologías de segunda generación, especialmente las dirigidas a la utilización de biomasa (celulosa, desechos forestales y otros), con el objetivo de sustituir progresivamente los cereales y las oleaginosas en la producción de biocombustibles.
3. Revisar la legislación existente para mejorar el marco legal y fiscal que regula y promueve la producción de biocombustibles.

Fundamentos

Las energías fósiles, petróleo y gas, contribuyen con el 36 y el 50 % respectivamente a la matriz energética argentina. El 13% restante es aportado por: la generación hidráulica 5%, nuclear 3%, leña y bagazo 2%, carbón 1% y otros primarios 2%.

Puede observarse que los biocombustibles representan un porcentaje ínfimo, 1,2% del total de la energía consumida. Sin embargo, debido a la disponibilidad de recursos naturales, la Argentina tiene un gran potencial para expandir la producción y aprovechar tanto la demanda interna como la importante demanda internacional, que estará presente en los próximos 20 o 30 años.

Después de ese periodo, es de esperar, que otras fuentes, incluyendo el hidrógeno, comenzarán a dominar la matriz energética mundial. La producción de biocombustibles es una excelente oportunidad de agregar valor a la producción primaria, aumentando el empleo y la actividad económica a nivel regional.

La Ley 26.093, sancionada en el año 2006 y reglamentada en el año 2007, estableció que a partir del 01 de enero de 2010 las naftas y el gasoil deberían contener un mínimo de 5% de bioetanol y de biodiesel respectivamente. Posteriormente, el porcentaje mínimo del biodiesel que debe ser incorporado al gasoil fue aumentado al 7%. Esta demanda inducida representa, en el año 2011, 1,2 millones de toneladas de biodiesel y 250 mil toneladas de bioetanol, las cuales pueden ser abastecidas sin problemas por la producción actual, existiendo un sobrante importante de biodiesel que se exporta principalmente al mercado europeo.

Las tecnologías en desarrollo, que se recomienda impulsar, ofrecen la oportunidad de utilizar celulosa de origen forestal y otros desechos en la producción de biocombustibles, siendo una fuente potencial de energía más eficiente y menos competitiva con la producción de alimentos.

VI.8 Agricultura familiar

Recomendaciones

1. Apoyar y fortalecer la instrumentación de las políticas diferenciales que contemplen, en forma integral, el acceso al crédito, la asistencia técnica y el acceso a los mercados de productos e insumos, mediante nuevas formas de organización, así como con los demás programas especiales que apoyan a la agricultura familiar.
2. Promover, a través de convenios con las provincias, el ordenamiento catastral en los casos en que fuera necesario para regularizar la propiedad de la tierra por parte de ocupantes tradicionales y especialmente de los pueblos originarios para proteger sus derechos.
3. Poner las necesidades de la agricultura familiar como elemento central para decidir las prioridades de inversión en relación a la infraestructura de caminos rurales, electrificación, comunicaciones, educación y salud.

Fundamentos

La agricultura familiar es parte importante de la producción agropecuaria. Las cifras del Censo del 2002 resaltan la existencia alrededor de 250.000 productores familiares que representan el 75% del total de empresas agropecuarias y disponen del 18% de la superficie total.

Dichas empresas familiares contribuyen con el 27% del valor bruto de la producción agropecuaria, aportando alrededor del 30% de la producción de frutales y alrededor del 50 % de la producción de hortalizas. Por lo tanto, su capacidad de producción y desarrollo es importante para la oferta de alimentos y la seguridad alimentaria nacional.

El desarrollo y consolidación de la agricultura familiar es también importante para lograr una adecuada distribución poblacional, la ocupación territorial y la descentralización del país. La agricultura familiar enfrenta una serie de desventajas económicas originadas en la imposibilidad de beneficiarse de las economías de escala de las empresas de mayor tamaño, que les permite lograr ventajas comerciales que logran debido a su mayor volumen de operaciones, el mayor acceso a la tecnología y a los créditos de largo plazo. Las políticas públicas deben estar orientadas a paliar estas desventajas y establecer mejores condiciones de competencia, así como a promover formas asociativas.

La expansión de la frontera agrícola pone en riesgo la ocupación histórica de tierras sin derechos jurídicos sólidos, es riesgoso y es necesario proteger a los pequeños productores y a las comunidades de los pueblos originarios.

VI.9 Fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria

Recomendaciones

1. Fortalecer el Ministerio de Agricultura en sus capacidades técnicas y políticas para que sea el ámbito natural del diseño y definición de la política agropecuaria y de los programas de intervención del sector público en la actividad agropecuaria.
2. Fortalecer las capacidades del Ministerio de Agricultura para participar y colaborar con otros ámbitos del sector público en áreas de responsabilidad compartida tales como, por ejemplo, las políticas sociales y de infraestructura de aplicación en el sector rural y las negociaciones comerciales internacionales relacionadas a la producción agropecuaria.
3. Desarrollar y fortalecer organismos descentralizados dentro del ámbito y competencias del Ministerio de Agricultura que tengan la responsabilidad principal para la implementación de las políticas y programas diseñados por el Ministerio de Agricultura. En este sentido es de especial prioridad: a) Fortalecer al INTA en las funciones de investigación y promoción de la innovación en la producción agropecuaria y agroindustrial; b) fortalecer institucionalmente al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), al Instituto Nacional de Semillas (INASE) y a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) en sus funciones específicas; c) crear un organismo encargado de ejecutar las

políticas y programas de apoyo a la agricultura familiar y que participe con otros órganos del Gobierno Nacional y Provinciales en los programas dirigidos a la erradicación de la pobreza rural; d) crear un nuevo mecanismo institucional, en reemplazo del ONCCA y del organismo que lo ha sucedido, que brinde información, promueva la transparencia y el buen desempeño de los mercados.

Fundamentos

La reciente creación de un Ministerio de Agricultura, si bien es un paso adelante, no ha resuelto la debilidad del Estado en su capacidad para diseñar e instrumentar una política agropecuaria y agroindustrial de carácter integral y de largo plazo que incorpore las nuevas realidades del contexto internacional. A estos fines es necesario fortalecer las capacidades técnicas del Ministerio y de los organismos descentralizados existentes y a crear.

VII. Reflexiones finales

Las cadenas agroindustriales pueden constituir uno de los ejes fundamentales del desarrollo económico y social de Argentina con un amplio alcance territorial, aprovechando las excelentes oportunidades que brinda el contexto internacional vigente y previsto para las próximas décadas en materia de comercio mundial de alimentos, fibras y biocombustibles.

Muy pocos países pueden expandir significativamente el área cultivada y la producción agroindustrial para abastecer el consumo interno y una demanda internacional dinámica de proteínas, aceites y otros alimentos a precios competitivos.

Argentina es uno de ellos y no debe dejar de beneficiarse de las oportunidades que ya están aprovechando los países vecinos que promueven el crecimiento de la producción agroindustrial a partir de políticas consistentes con su desarrollo, como es el caso de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Colombia.

Para ello es necesario revisar la visión arcaica y equivocada que se ha incorporado en el imaginario popular respecto de la agricultura, que no percibe adecuadamente la importancia estratégica del sistema agroalimentario para el crecimiento económico y social sin subsidios. También se debe destacar la gran capacidad de generar empleo y el fortalecimiento del entramado económico y social que involucra a más de 400 mil PYMES de capital nacional que participan en cada uno de los eslabones que integran las principales cadenas agroindustriales, tanto en las actividades de provisión de insumos y servicios, como en la producción primaria, el procesamiento y la distribución en todo el territorio argentino.

La experiencia de las últimas dos décadas, en las que se registraron profundas transformaciones tecnológicas y organizacionales en las principales cadenas, son una muestra evidente de la alta capacidad de respuesta del sector a los incentivos económicos y, también son muestra, de su importancia económica y social directa para el desarrollo territorial, así como por su alto impacto en la producción y el empleo en el resto de la economía.

Estas transformaciones permitieron un crecimiento significativo, pero muy inferior al potencial, en la producción de granos; pero otras cadenas quedaron postergadas y las políticas implementadas generaron distorsiones y desincentivos, con la consecuente postergación del interior del país.

En todo el mundo y en los principales foros internacionales las políticas agroindustriales están mereciendo una atención creciente, por sus aportes estratégicos a la seguridad alimentaria, a la conservación de los recursos naturales, a la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático y a la producción de energías renovables. Argentina no puede estar ajena a este proceso y, por el contrario, debe aprovechar los importantes aportes que el sector puede realizar para el desarrollo económico y social, como también, para la recuperación del liderazgo perdido en las últimas décadas en el contexto internacional.

Ello implica acordar Políticas de Estado que brinden un marco propicio para el crecimiento agroindustrial como una parte esencial de una estrategia nacional de desarrollo económico y social sustentable del país.

A partir de la experiencia acumulada durante nuestras gestiones hemos sugerido un conjunto de políticas e instrumentos destinados a promover el desarrollo rural territorial con equidad y un profundo respeto por la conservación de los recursos naturales, con la convicción de que el sistema agroalimentario y agroindustrial es uno de los pilares clave del desarrollo equilibrado del país.

El propósito de esta propuesta es dar lugar a un intenso debate sobre la visión y las políticas públicas sectoriales como instrumentos para el desarrollo equilibrado y sustentable de Argentina. Una reflexión necesaria que el país nos exige, a fin de construir un futuro promisorio para las generaciones venideras y para avanzar hacia un ámbito realmente federal y con mayor equidad en la distribución territorial y social del ingreso.

Precio \$4,30
 Suscripción mensual \$40,00
 Suscripción semestral \$210,00
 Año \$400,00
 Suscripción al exterior \$595,00

LA NACION

lanacion.com

Buenos Aires, jueves 14 de julio de 2011

EL TIEMPO, HORAS
 10° 20°
 Min. Máx.
 Noticias online: www.lanacion.com
 Suscripción al exterior: \$595,00
 Economía, Pág. 6

Cuestionan ex funcionarios la política agropecuaria

SE PIERDEN US\$ 8000 MILLONES AL AÑO



Regúnaga, Reca, Leguiza y Delpech

Pertenecen a distintos partidos y piden incentivar las exportaciones

Los lineamientos de una política de Estado para el sector agropecuario que le permita al país un crecimiento con mayor producción de granos y exportaciones fueron presentados ayer en un documento elaborado por cuatro ex secretarios de Agricultura de distintos gobiernos y diferentes partidos políticos.

"Si hubiéramos crecido con políticas menos discriminatorias hacia el sector agropecuario, hoy podríamos estar exportando unos 8000 millones de dólares más por año (adicionales a los 20.000 millones actuales)", fue una de las conclusiones más contundentes del trabajo difundido en la Bolsa de Comercio de Rosario. Y agrega que ese crecimiento significaría unos 300.000 nuevos puestos de trabajo.

Siguiendo el modelo aplicado por ex secretarios de Energía, constituidos como foro para analizar la crisis de su área, Lucio Reca (ex secretario de Agricultura de Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (ocupó esa cartera durante las gestiones de Carlos Menem y de Fernando de la Rúa), Jesús Leguiza (durante la época presidencia de Adolfo Rodríguez Saá) y Rafael Delpech (con Eduardo Duhalde) presentaron ayer el documento "La agroindustria para el desarrollo argentino: aportes para una política de Estado".

En el trabajo, los ex secretarios piden, además, eliminar las retenciones a las exportaciones en forma gradual. **económia**

lanacion.com

Jueves 07 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa - Fernando Bertello

El turno de los ex de Agricultura

Presentarán un plan estratégico para el sector, que incluirá críticas indirectas al Gobierno

Siguiendo la tendencia inaugurada por ocho ex secretarios de Energía, que de manera conjunta consensuaron varios documentos críticos sobre la situación energética del país, cuatro ex secretarios de Agricultura, vinculados con distintos gobiernos, lograron hacer un documento con propuestas de políticas de Estado con eje en la agroindustria. Dicen que no incluyeron críticas directas a la administración Kirchner, pero sí indirectas cuando abordaron temas como la necesidad de contar con mercados "transparentes" para el sector.

Los ex secretarios de Agricultura son Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Jesús Leguiza y Rafael Delpech. El primero fue funcionario del ex presidente Raúl Alfonsín; el segundo, con Carlos Menem y luego con Fernando de la Rúa; el tercero fue secretario durante la semana que Adolfo Rodríguez Saá fue jefe del Estado tras la caída de De la Rúa, y el último estuvo con Eduardo Duhalde. Van a presentar el documento, titulado "La agroindustria para el desarrollo argentino. Aportes para una política de Estado", el próximo miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario. Acordaron no hablar hasta ese momento, pero igual trascendió parte de su contenido.

"No analizamos un gobierno en particular ni tratamos de que esto se visualice como algo en contra de este gobierno, aunque pensamos que hay que hacer cosas distintas", dijo uno de esos ex secretarios.



Pese a que no habría críticas directas, sí las habría indirectamente en algunos puntos. Uno de ellos, cuando hablan de la comercialización.

"Decimos que los mercados deben ser transparentes y sin intervención", contó. Esta mención se contrapone con lo realizado por el Gobierno, que en los últimos años intervino los mercados de carne, leche, trigo y maíz. "También pensamos que las retenciones no son un buen impuesto", subrayó otro de los ex funcionarios.

Diez políticas

Los ex funcionarios se centran en una decena de políticas que debería adoptar el gobierno que asuma en diciembre próximo, "sea cual fuere el partido político que resulte victorioso".

Hay referencias, además del tema de la comercialización, a cuestiones sobre tecnología e innovación, logística, recursos naturales, agricultura familiar e "institucionalidad del sector".

Uno de los ex funcionarios planteó que con este documento buscan transmitir el mensaje de que a la agroindustria no se le ha dado toda la importancia que tiene en cuanto a la generación de empleo y desarrollo. "Hubo políticas equivocadas desde los cuarenta para acá", dijo.

Los ex secretarios comenzaron a trabajar en conjunto en septiembre del año pasado. Algunos se conocen desde el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), donde trabaja un comité de Asuntos Agrarios, aunque este organismo no tiene nada que ver con este documento.

ClarínX

11 JUL 2011 08:19h - PorSILVIA NAISHTAT- snaishtat@clarin.com

Campo: menos retenciones y trabas para poder producir más

Los ex funcionarios de distintos gobiernos plantean otra política agroindustrial.

Cada vez más pensadores sitúan a la producción de alimentos en el siglo XXI en el mismo y decisivo rol que tuvo la industria durante el siglo XX. Con una población mundial creciente y la severa limitación de las tierras arables y del agua, los datos de cómo evolucionan los cultivos ya no forman parte de la estadística común. Integran la agenda de los gobiernos.

Y Argentina es clave en el mapa de la agroindustria mundial.

Pero un grupo de ex secretarios de Agricultura plantea la necesidad de una política que permita llegar más lejos. Este miércoles, Lucio Reca (gestión Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (Menem y De la Rúa), Jesús Leguiza (Rodríguez Saa) y Rafael Delpech(Duhalde), pasarán la prueba al difundir un manifiesto en la Bolsa de Rosario.

Allí proponen reducir gradualmente las retenciones a las exportaciones de granos y compensar la disminución en la recaudación con un anticipo del impuesto a las Ganancias.

"El agro debe tributar con la misma estructura de impuestosnacionales coparticipables aplicada al resto de los sectores económicos. Se debe concentrar la recaudación fiscal nacional en el Impuesto a las Ganancias y en el IVA. Para ello las retenciones deben ser sustituidas por dichos impuestos coparticipables que carezcan de efectos depresivos sobre la producción", señalaron en el documento al que accedió Clarín. También estiman que es posible aumentar 50%la producción agropecuaria y que podrían crearse 220.000 empleos.

Aquí, los otros puntos:

- * Generar políticas que impulsen el desarrollo sostenible del sector agropecuario y de las áreas rurales, la creación de empleos genuinos y el equilibrio territorial.*
- * Compartir una nueva visión del desarrollo rural, que excede a la actividad agropecuaria primaria, incorporando a las actividades industriales posteriores y servicios.*
- * Impulsar la generación y adopción de tecnología*
- * Establecer una política de comercialización y de precios transparente, eliminando las intervenciones arbitrarias de las autoridades en el mercado interno y las exportaciones.*
- * Participar activamente en las negociaciones que impulsen un comercio mundial sin barreras a la producción y posicionen a Argentina como proveedor responsable y confiable de alimentos y biocombustibles.*
- * Promover la bioenergía con un adecuado equilibrio en el uso de los recursos naturales.*
- * Mejorar la infraestructura de transporte y de riego. Diseñar medidas para la utilización y preservación de los recursos naturales renovables y que, en particular, preserven la cantidad y la calidad de los suelos y de las aguas.*

ClarínX

14 JUL 2011 09:13h - Por ANDRES ACTIS

Para ex secretarios de Agricultura el Gobierno tiene una visión “arcaica” Presentaron un documento en el que demandan menos retenciones y trabas.

Cuatro ex secretarios de Agricultura de la Nación presentaron ayer en sociedad un documento con fuertes cuestionamientos al Gobierno por su “arcaica y atrasada visión” sobre el campo. Pidieron eliminar gradualmente las retenciones y terminar con las barreras a las exportaciones.

El escrito, titulado “La agroindustria para el desarrollo argentino: aportes para una política de Estado”, fue confeccionado por los ex secretarios Lucio Reca (1983-1986), Marcelo Regúnaga (1991-1993/2001), Jesús Leguiza (2001) y Rafael Delpech (2002). El documento, según sus autores, busca promover la “concertación de políticas públicas” con el único objetivo “de promover el desarrollo económico y social del sistema agroindustrial, como pilar fundamental de la economía del país”. La presentación se realizó ayer en la Bolsa de Comercio de Rosario ante un nutrido grupo de dirigentes y empresarios del sector.

El documento pide “duplicar” la inversión en investigación, tecnología y desarrollo. Llama a “desterrar el ejercicio arbitrario de las intervenciones en el mercado y las barreras a las exportaciones”. Otro de los puntos que se demanda es que “en el mediano y largo plazo el sector tribute con la misma estructura de impuestos que el resto de los sectores económicos”. Al momento de la presentación del documento, Reca aclaró que el escrito no se redactó con ánimo “crítico ni destructivo. A la agroindustria hoy no se la entiende como un sector dinámico y eso es un gravísimo error. Hay que entender que los vientos de cola no van a ser eternos. Nosotros pensamos que hay una visión arcaica que percibe a la agricultura como un sector no tecnificado y limitado a generar solamente renta naturales, lo que ha limitado el crecimiento del país”, dijo Reca.

Delpech aseguró que Argentina tiene un “sistema tributario y político que conspira contra el desarrollo de los pueblos del interior. Somos el único país que tiene impuestos a las exportaciones”, puntualizó. Regúnaga hizo hincapié en “aprovechar la oportunidad histórica” que hoy brinda el mercado internacional. Y Jesús Leguiza, en la misma sintonía, concluyó: “Depende sólo de nosotros recuperar aquel mote del granero del mundo. El contexto es fabuloso porque mundo demanda nuestras materias primas”.

LA VOZ DEL INTERIOR

La Voz del Campo - Córdoba, 15/07/2011 00:02 - Carlos Petrolí.

El "mea culpa" de los secretarios

En una de las semanas más políticas del campo, por el inicio de la muestra Rural de Palermo, ex funcionarios del área agropecuaria - de distinto signo político - presentaron un documento conjunto. Aportes para una política de Estado.

** El campo está en la antesala de una de sus semanas más políticas. A las puertas de la cita anual de la Rural de Palermo, la ocasión se presentó de lo más propicia: ex funcionarios de signo partidario diverso –y que ocuparon en los años recientes el sillón de la cartera agropecuaria nacional– salieron a la palestra con un documento conjunto.*

En un año electoral, la presentación buscó justificarse por partida doble. Y, si además se tiene en cuenta la controvertida política rural que siguió en estos años la administración kirchnerista, la señal de los ex secretarios acumula más razones. La primera no es menor: peronistas y radicales –por citar a las dos fuerzas mayoritarias– se insinúan en la búsqueda de coincidencias y con una mirada estratégica de largo plazo. Gesto que también puede verse como un mea culpa al cabo de décadas de desarreglos.

Por encima de algunos instrumentos, la presentación del miércoles en la Bolsa de Comercio de Rosario abonaría la intención de corregir y sepultar la visión sectaria y cortoplacista del agro que predominó en los tiempos recientes.

Cada uno en su tiempo. Lucio Reca (en los '80 con Raúl Alfonsín), después Marcelo Regúnaga (Carlos Menem y Fernando de la Rúa), Jesús Leguiza (Adolfo Rodríguez Saá) y Rafael Delpech (en la etapa de Duhalde, a principios de los 2000), fueron protagonistas directos, en diferentes escenarios internacionales, de los vaivenes que signaron la marcha de la "locomotora verde".

Ahora se juntaron a la vuelta de tres décadas para poner el foco en una política de Estado a largo plazo. Ese sólo gesto indica que algo aprendieron del SDLq stop and go SDRq (detención y arranque) que llenó de traumas y zozobra a empresas y ciudadanos de a pie, con políticas económicas y agrarias que oscilaron sin escalas entre el proteccionismo y la apertura, sin rumbo y metas claras.

Bajo el título "La agroindustria para el desarrollo nacional: aportes para una política de Estado", arrojan lineamientos que tienen puntos de contacto con otras propuestas.

Por caso, la que presentaron semanas atrás ante legisladores en el Congreso las cámaras empresarias de la Región Centro, entre otros trabajos que intentan nutrir las futuras plataformas de Gobierno. En casi ninguno de los casos, a excepción de los papers y discursos oficialistas (los del actual espacio kirchnerista) se habla de “profundizar el modelo”. Por el contrario, se advierte sobre la necesidad de superar concepciones erróneas sobre la importancia central del sistema agroalimentario y agroindustrial.

Contribución al debate. Los ex secretarios mencionan que su iniciativa debe tomarse como “una contribución al debate que debe darse en la Argentina para que la política agropecuaria nacional alcance la categoría de política de Estado, consensuada por los distintos integrantes de la sociedad y, en consecuencia, estable”.

Entre las tareas pendientes, urgentes e importantes citan que, como consecuencia de una política comercial inadecuada, se perdieron y se continúan perdiendo oportunidades para aprovechar plenamente las condiciones del mercado internacional y expandir al máximo la producción.

Las oportunidades perdidas se ponen especialmente en evidencia en la comparación con la ganadería de países vecinos. La declinación reciente de la ganadería doméstica, añaden, debe compararse con incrementos de la producción del 20 por ciento en Uruguay, 31 por ciento en Paraguay y 42 por ciento en Brasil durante la última década. Pero la lista de deberes es más amplia; lo importante es que, asumiendo los errores propios y del pasado, quienes fueron funcionarios intentan un aporte para no volver a tropezar con la misma piedra.

Página 12

Por Alfredo Zaiat - 17/07/11

El club de ex secretarios

En debates políticos, sociales y económicos que recorren el espacio público se desarrolla una peculiar dinámica, en la cual el agresivo manifiesta ser agredido por quien él está agrediendo. Se presenta así un marco de discusión desigual que busca subordinar al otro que piensa diferente.

En materia económica, en estos días de inauguración de la 125ª Exposición Rural de Palermo la actividad agropecuaria convoca a una de esas grandes controversias del desarrollo nacional. Con la premisa de “discutir y acordar políticas”, cuatro secretarios de Agricultura de los gobiernos de Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Eduardo Duhalde, imitando a sus colegas de Energía de esos gobiernos, se reunieron y emitieron un documento titulado “La agroindustria para el desarrollo argentino: Aportes para una política de Estado”.

Esa invitación, que se presenta abierta para pensar el futuro del sector y de la economía, ofrece las siguientes muestras de convivencia con el que tiene ideas distintas a lo largo del documento: “visión arcaica y equivocada”; “concepciones erróneas”; “percepciones erróneas”; “hechos innegables”; “se carece de una visión de largo plazo”; “carece de sustento racional”. Es un marco conceptual con un sesgo de desconsideración que no favorece el intercambio de propuestas, escenario que precisamente reclaman como carencia de a quienes critican. En esas condiciones, es un esfuerzo doble.

Los secretarios de Agricultura Lucio Reca (1983-1986), Marcelo Regúnaga (1991-1993; 2001), Jesús Leguiza (2001) y Rafael Delpech (2002) elaboraron un primer documento conjunto. Claudio Scaletta, en su columna que se publica hoy en el suplemento Cash de economía, señala como un oportuno recordatorio que haber ocupado funciones de gobierno durante esos períodos de profundos desequilibrios macroeconómicos “es un pobre pergamino para argumentar desde la presunta autoridad”. Esos funcionarios escribieron en el último párrafo de las reflexiones finales de un documento de 26 páginas que “el propósito de esta propuesta es dar lugar a un intenso debate sobre la visión y las políticas públicas sectoriales, como instrumento para el desarrollo equilibrado y sustentable de Argentina”. La lectura de este plan programático refleja nula autocrítica y una consideración elogiosa a las políticas agropecuarias de la década del noventa, desdeñando cualquier referencia al período alfonsinista pese a que uno de los miembros del club de ex secretarios integró ese gobierno radical.

En términos generales reivindican el modelo agroalimentario y agroindustrial exportador como el adecuado para el desarrollo nacional. Proponen entonces revisar “la visión arcaica y equivocada” que estiman que se ha “incorporado al imaginario popular” respecto de la agricultura. Dicen que ese imaginario popular “no percibe adecuadamente la importancia estratégica de su sistema agroalimentario para el crecimiento económico y social sin subsidios”. Afirman que “la producción agropecuaria ha sido, y es, uno de los pilares de la economía argentina”, pero cargan culpa a circunstancias nacionales e internacionales, que ubican a mediados del siglo (el peronismo), la instalación de una imagen distinta en el pensamiento económico y en la sociedad. Se quejan de que “a la agricultura le quedó reservado el papel de sector dudoso y hasta perjudicial en el escenario político de nuestro desarrollo económico y social”. Consideran, en una insólita posición de víctimas, que es un sector no reconocido pese a ser “el principal conglomerado productivo y altamente competitivo del país en su conjunto y de la mayoría de sus regiones”. Todo eso pese “a todas las dificultades generadas por políticas desacertadas”. Con la obsesión de transmitir que el complejo agropecuario es el principal creador de riquezas y de empleo en el país, reiteran ese análisis forzado de las tablas de insumo-producto de las Cuentas Nacionales que señala que el sistema agroalimentario y agroindustrial “genera en forma directa no menos del 20 por ciento del PBI”, y “del 20 al 30 por ciento del empleo total del país.

Según las metodologías de cálculo del empleo indirecto”.

Cifras que ya han sido refutadas por investigaciones académicas. Remarcan que “son hechos innegables” que la producción agropecuaria constituye “una de las mejores opciones de crecimiento y desarrollo equilibrado del país”. Carece el documento, sin embargo, de referencias a experiencias internacionales de países desarrollados o de nuevas potencias que hayan alcanzado esa categoría eligiendo esa opción. Insisten con esa idea de proveedor no reconocido al indicar que “el sistema (el campo) ha subsidiado y subsidia al resto de la economía y de la sociedad”, y que la agroindustria incluye a más de 400 mil empresas, en su mayoría pymes.

En un audaz rescate al período menemista, destacan que en 1993-99 “el crecimiento y las nuevas formas de organización de la agricultura implicaron un aumento notable de las inversiones, del área cultivada y la producción, y generaron 200 mil empleos directos adicionales”. No hacen referencia a que ese proceso de expansión motorizó una acelerada concentración de tierras y de producción, además de expulsión de mano de obra rural, como lo reflejan los censos agropecuarios. Además, sumergió a miles de productores en deudas impagables, que muchos padecieron el remate de sus campos en esos años, y otros recién fueron rescatados por el Banco Nación luego del cierre de esa etapa económica celebrada por esos cuatro ex funcionarios. En todo el documento no es mencionada la producción de soja que derivó en el desplazamiento de la ganadería, en la pérdida de puestos de trabajo, la expulsión violenta de sus tierras de campesinos y la transformación del chacarero en rentista por el alquiler de sus campos. El club de ex secretarios de Agricultura convoca el enfrentamiento Agro versus Industria, debate que representantes de ambos sectores dicen que debe ser superado para pasar a un estado de convivencia y complementación productiva. Calculan que “un incremento del 50 por ciento de la producción de cereales y oleaginosas generaría entre 220 y 240 mil empleos en los distintos eslabones de esas cadenas en el término de una década”, para agregar que esa cifra “puede ser contrastada con los 11.000 empleos adicionales que generó la industria automotriz (terminales y autopartes) durante el período 1998-2008, cuando la producción aumentó también 50 por ciento”.

En ese marco conceptual, las políticas propuestas son previsibles:

- La eliminación gradual de las retenciones, definidas como impuestos y no como aranceles a las exportaciones, y su sustitución por los impuestos aplicados al resto de la economía (Ganancias e IVA). No precisaron las medidas necesarias para convencer a los diferentes protagonistas de la cadena agropecuaria de la obligación que tienen con sus actuales compromisos tributarios, que no se destacan por su cumplimiento.*
- Eliminar las restricciones a las exportaciones. Estiman que si se liberara el comercio de cereales y oleaginosas, la producción podría aumentar un 50 por ciento y así llegar a los 150 millones de toneladas en una década.*

No hacen mención a garantizar el abastecimiento interno, lo que hace suponer que el mercado local quedaría subordinado al internacional, tanto por precios como por cantidades disponibles.

- Firmar Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos, Europa, China, Japón. No desconocen esos ex funcionarios que esa estrategia viola los acuerdos con los países socios del Mercosur. Esto implica romper con el proyecto de integración regional, sin evaluar que países como Chile y México por su asociación de libre comercio con Estados Unidos han padecido un mayor costo económico en la reciente crisis internacional. Estas medidas, como las observaciones críticas a la intervención estatal en la comercialización interna, son expuestas "a partir de la experiencia acumulada durante nuestra gestiones", afirman ex secretarios de Agricultura de fuerzas de la oposición. Dicen que se presentan para revisar una "visión arcaica y equivocada". A ese club se le rompió el espejo.

azaiaat@pagina12.com.ar

lanacion.com

Lunes, 18 de junio - Por Félix Sammartino

Cuatro mosqueteros contra los molinos de viento

Sábado 16 de julio de 2011 | Publicado en edición impresa

"Serás militante o no serás nada", ya no es sólo una consigna kirchnerista. Hay que aceptar que la marcha a tambor batiente con iniciativas llenas de voluntad y fantasía, como los planes "Cerdo para Todos" y "Lácteos para Todos" con camiones dispuestos a repartir felicidad mediante descuentos de precios, es difícil de igualar. Se requiere por lo menos no ponerse colorado al afirmar que es "para todos" cuando la iniciativa se sostiene en lo que puedan repartir tres camiones (uno para lácteos de 20.000 kilos y dos para cerdos de 5.000 kilos). En el mejor de los casos, repartiendo todos los días, no se llega ni al uno por diez mil del consumo nacional diario. Poco importa que tras el paso del camión no quede nada, salvo los pocos que accedieron a la ganga. Mientras esto sucedía, en Rafaela, 250 tamberos decidían una medida de fuerza por la baja del precio de la leche pagada en los tambos y en Camilo Aldao se levantaba otra asamblea de 200 productores de porcinos contra la importación de pulpa brasileña.

En la lechería están nerviosos porque viven una primavera adelantada, es decir con señales de tener un mercado sobreofertado. La mayor producción de leche, que crecerá este año alrededor del 9%, no encuentra su correlato en la capacidad industrial para la elaboración de leche en polvo. Con las plantas de secado trabajando a pleno, los quesos se convierten en el único destino obligado. La falta de inversiones de los últimos seis años se termina pagando.

El problema es que no es lo mismo exportar toneladas de leche en polvo, un commodity con cotización internacional, que abrir cupos y vender quesos país por país. La salida exportadora de los excedentes será mucho más lenta y trabajosa.

A esta situación ya de por sí complicada, hay que agregarle dos problemas que se los regala la macroeconomía. Uno es el mercado interno que no tiene la vitalidad del año pasado: según los distribuidores de quesos "después del día 15 se paran las ventas". Y el otro es la inflación, que mes a mes se viene comiendo los márgenes de rentabilidad por el alza de costos de producción. Las cartas están jugadas al comportamiento que pueda tener la exportación en el segundo semestre para absorber la sobreproducción. Pero decíamos que la militancia en la actividad agropecuaria ya no es una actividad exclusiva del kirchnerismo. Y no estamos hablando de la dirigencia rural que ya comenzó su actividad en la Rural de Palermo.

¿Tendrá la Mesa de Enlace el mismo protagonismo de los últimos años?

Lo que llamó la atención esta semana fue la aparición pública, luego de años de estar alejados del escenario político, de cuatro ex secretarios de Agricultura, Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Jesús Leguiza y Rafael Delpech. Abandonaron la tranquilidad de sus actividades cotidianas para abrazar la militancia de una causa que en principio parece perdida o, por lo menos, quijotesca.

Con el documento "La agroindustria para el desarrollo nacional: aportes para una política de Estado", proponen una nueva agenda y pretenden que la clase dirigente tenga una visión estratégica del panorama mundial. Quizás estén pidiendo demasiado. La militancia de los cuatro ex secretarios se pondrá a prueba en la gira que emprenderán con el objetivo de convencer a los partidos políticos, a los legisladores, a los funcionarios de este gobierno, a las universidades y a la sociedad en su conjunto que el sistema político y tributario conspira desde hace años contra el desarrollo del interior del país.

El documento realiza una comparación interesante con la industria automotriz. Afirman que en el término de una década, un incremento de la producción de cereales y leguminosas del 50% generaría entre 220 a 240 mil empleos. Los autopartistas y terminales de autos, durante el período 1998-2008, cuando la producción aumentó un 50%, generó 11.000 empleos directos. No de forma casual eligieron a Rosario y a la Bolsa de Cereales para la presentación del trabajo, lo consideran un lugar emblemático del polo agroindustrial. Vale apuntar que pocas semanas atrás también se presentó en Rosario una propuesta de reforma tributaria integral consensuada nada menos que por 36 entidades empresarias de la región centro que componen las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

El trabajo se puso a consideración de los gobiernos y legisladores de estas provincias. La segunda presentación de la gira de los mosqueteros será en Río Cuarto y tendrán a otro ex secretario, Gumersindo Alonso, como maestro de ceremonia. Se suma entonces otra iniciativa para construir una política de Estado que trascienda los gobiernos. Casi una misión imposible.

Por ahora, la política compra sólo lo que lleva la etiqueta de "inmediato" aunque no deje nada para mañana. Como si fueran aficionados del arte efímero.

lanacion.com

Sábado, 16 de Julio de 2011 - 17:00 - Esto que pasa

Lo que ignora Fito Páez

(Especial para NA por Pepe Eliashev) - Una cuidadosa lectura de la realidad revela que suceden otras cosas muy importantes en la Argentina, al margen de los reveladores resultados electorales. Tal vez la estrepitosa derrota del kirchnerismo en las elecciones porteñas del domingo agotó la agenda mediática, pero sin embargo hay más.

Nada evitó que Cristina Kirchner anunciara un nuevo capítulo de su ya larga serie 'para todos'; ahora le tocó el turno a los chanchos y a los lácteos. Cuando la Presidente hacía los anuncios (continuidad de otros divulgados y jamás continuados planes de merluza, milanesas y LCD, siempre 'para todos'), en el interior del país asambleas de productores tamberos y porcinos analizaban la trascendencia real de estos esquemas, que dicen procurar llegar a sectores populares con precios hasta 50 por ciento más bajos.

Rápidamente se constató que los anuncios no consiguen cubrir ni el 1 por ciento del consumo diario de credo y lácteos. De clara impronta 'morenista' (son ideas obsesivas del secretario Guillermo Moreno), el operativo 'Lácteos para Todos' arranca con un (1) camión con capacidad para 20.000 kilos, cargado con leche fluida, quesos, manteca, yogur y postres. Aún cuando se ignora cómo se reparte la carga en el camión, si la mitad de sus 20 mil kilos de capacidad fuera leche fluida, alcanzaría al 0,0022% del consumo diario de leche.

Según los más recientes datos oficiales completos, se consumen por día en el país un poco más de 4.5 millones de litros. Si la otra mitad fuera para quesos, cubriría el 0,013% del consumo diario (que en 2009 fue de 720 mil kilos). Moraleja: 'esto es una payasada', según explicitó Manuel Ocampo, de la Asociación de Productores de Leche (APL).

Medios periodísticos recordaron que mientras el programa oficial cuenta por ahora con un solo camión diario, la poderosa láctea La Serenísimas despliega todos los días 892 camiones para distribuir su producción. Cerdo para todos porque, claro, no hay ya carne vacuna para todos.

Esta semana, se supo que los neoyorquinos están mejor que los argentinos a la hora del asado. El columnista Jorge Oviedo, de 'La Nación' fotografió en Manhattan la vidriera de una carnicería donde se anuncia tapa de cuadril de vacas raza Angus, carne óptima, al equivalente de 36,50 pesos el kilogramo.

Ese mismo corte en calidad equivalente se cobra en las carnicerías porteñas a un promedio de 45 pesos el kilogramo, 23% más caro. Mientras que suprema de pollo de primera calidad se ofrece en la ciudad de Buenos Aires a 48 pesos el kilo, se vende a solo el equivalente de 31,90 pesos en Nueva York.

Estos ingeniosos programas del Gobierno, anunciando carne de vaca, pollo y cerdo a precios por debajo de los del mercado, son pedestres operativos electorales. El infinitesimal porcentaje de la demanda cubierto, es irrelevante para la canasta familiar de la mayoría de los hogares, pero el kirchnerismo padece de una debilidad incontenible por los anuncios.

'Si hubiéramos crecido con políticas menos discriminatorias hacia el sector agropecuario, hoy podríamos estar exportando unos 8000 millones de dólares más por año, sólo en productos agrícolas' subrayaron esta semana cuatro ex secretarios de Agricultura de diferentes gobiernos y partidos políticos al presentar los lineamientos de verdaderas políticas de Estado que permitirían a la Argentina crecer con mayor producción y exportación de granos, con un efecto multiplicador en la mano de obra. Titulado 'La agroindustria para el desarrollo argentino: aportes para una política de Estado', el documento encarna el mismo criterio del grupo integrado por ocho ex secretarios de Energía (que acordaron documentos críticos sobre la espinosa situación energética del país). Lo firman Lucio Reca (Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (Carlos Menem y Fernando de la Rúa), Jesús Leguiza (Adolfo Rodríguez Saá) y Rafael Delpech (Eduardo Duhalde).

En el Congreso Nacional se documentó, en simultaneidad con los anuncios 'para todos', que la inflación de la Argentina está en el 23.6% anual, cifra a la que se llega al verificar una suba del 1,52% para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio. Las bancadas opositoras (radicales, peronistas, cívicos) en el literalmente paralizado Congreso, estimaron de esa manera el promedio de las estimaciones de las consultoras privadas. Fue la segunda vez que los diputados difunden el llamado 'IPC Congreso', una manera de asumir las mediciones de consultoras privadas perseguidas y multadas por Cristina Kirchner.

El aumento del 1,5% en junio contrasta con el 0.7% dibujado por INDEC intervenido por el Poder Ejecutivo desde enero de 2007. De enero de 2007 a mayo de 2011, las consultoras midieron una inflación acumulada del 130,3%, los institutos públicos provinciales dieron 129,4% y la Casa Rosada, en cambio, sólo admitió en esos 53 meses una suba del 44,4%. No fue la única noticia jugosa.

La Argentina gastara en 2011 más de 10.000 millones de pesos para importar gas. En la actualidad, el país compra más de siete millones de metros cúbicos de gas a Bolivia y otros 18 millones a través de los buques regasificadores que llevan a Bahía Blanca y Escobar gas licuado extranjero.

Se estima que esas operaciones costarán para todo 2011 más de 2600 millones de dólares, entre tres y cuatro veces más que el total comprado en 2010. Pero como el precio del gas vendido por Bolivia a la Argentina viene aumentando fuertemente, a fines de 2011 la factura podría llegar a 4000 millones de dólares. A estas inquietantes verificaciones, deben añadirse otros temas delicados.

Se comprobó que Gerardo Martínez, el jefe del sindicato de la Construcción y candidato nunca del todo blanqueado por el Gobierno para reemplazar a Hugo Moyano al frente de la CGT, integró el batallón 601 de Inteligencia del Ejército durante la dictadura.

Con el legajo 2798 aparece en la llamada 'Nómina del Personal Civil de Inteligencia que revistó en el período 1976-1983', con su DNI 11.934.882. El Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines (SITRAIC), la CTA opositora y diferentes organismos de derechos humanos hicieron la denuncia penal contra Martínez. La denuncia se pregunta 'cómo resultó posible, desde su ingreso a la estructura represiva de inteligencia, hasta la fecha, que el denunciado gozara de suficiente protección oficial para seguir desempeñando sus funciones sindicales sin que se conociera su vinculación con el aparato genocida represivo de la dictadura'. Hubo todavía más malas noticias para el Gobierno. la justicia comprobó que los perfiles genéticos de Marcela y Felipe Noble Herrera, hijos de Ernestina Herrera de Noble, son diferentes a los de las dos familias que se querellaron en la causa por la filiación de los dos hermanos. En resumen: no tienen vínculo biológico. Fue un duro revés para el Gobierno porque desde 2006/2007, el kirchnerismo se mantiene en pie de guerra contra el Grupo Clarín, aun cuando las presiones contra el periodismo se han ido agravando sin cesar ya desde 2005. Además, dos exaltados admiradores del presidente de Irán, Majmud Ajmadineyad, Luis D'Elía y Mario Cafiero, siguen en la agenda como si nada hubiese pasado, tras haber viajado en peregrinaje a Teherán.

D'Elía anduvo ironizando sobre los candidatos judíos en la ciudad de Buenos Aires, mientras que Cafiero ha sido bendecido por Pino Solanas como candidato a gobernador de Buenos Aires.

Las Madres de Plaza de Mayo no pagan los sueldos de los albañiles y mandan a los obreros a que se lo reclaman a Sergio Schoklender, mientras que 11 colegios secundarios de la Capital, tomados la semana pasada por agrupaciones kirchneristas, han vuelto por ahora a clase. ¿Esperan el balotaje del 31 de julio? ¿Qué pasaría si Mauricio Macri ese día se alza con dos tercios de los votos? Ni Fito Páez lo sabe.

ON24

Redacción On24 - Martes 30 de Agosto de 2011 - Hora: 17:24

Agro y políticas de Estado

Una línea de 4 sale a cortar las retenciones

Otros cuatro que no son la Mesa de Enlace proponen reemplazarlas por anticipo de pago de Impuesto a las Ganancias. Punta del iceberg de un Master Plan para el sector

“Lo nuestro es osado. Es como querer jugar en Boca a los 60 años”, dijo Leguiza. La frase fue pronunciada por el cuarteto de técnicos que se “atrevió a hablarles del campo a los hombres del campo”, pero sin soberbia y con una apuesta a debatir con todos. Bajo la complicidad sonriente del presidente de la institución, Cristián Amuchástegui, en la sobria elegancia del salón Cordiviola de la Bolsa de Comercio de Rosario, cuatro ex secretarios de Agricultura esgrimieron, un arma para destruir a cualquier improvisado. Un plan sintético, al que bautizaron “La agroindustria para el desarrollo: Aportes Para Una Política de Estado”. Será llevada al Congreso en pocas semanas, donde piensan presentársela a los jefes de todos los bloques en ambas cámaras.

En su primera presentación pública, este grupo compuesto por Lucio Reca (durante el Gobierno de Raúl Alfonsín), Marcelo Regúnaga (Menem y De la Rúa), Jesús Leguiza (breve interregno de Rodríguez Saá) y Rafael María Delpech (Duhalde) propone una serie de puntos para que deje de hablarse del “sector agrícola” en el que “se cree que la renta no es ganada sino que llega porque Dios quiso que la tierra fuera fértil” para que se empiece a describir con exactitud “los engranajes de las cadenas agroindustriales”, a los que Reca comparó con un delicado mecanismo de reloj suizo, en el que cada pieza tiene que funcionar.

Documentados

Para semejante propuesta, llegaron a la Bolsa con datos. El enfoque tiene en cuenta el rol “imponente” de la tecnología (llamada en otros países Revolución Verde) con todas sus implicancias: Siembra Directa, biotecnología en semillas, management empresario, fertilizantes, arquitectura financiera y capacidad de molienda.

Además, se refiere a la demanda de los mercados externos, señala que hay que cuidarse de los países competidores como Brasil, pide “estabilidad institucional” a contrapelo de la “intervención arbitraria de organismos estatales” (por caso, la ONCCA y el mecanismo poco claro de los subsidios) y pide cambios en la base tributaria hacia un “sistema más equitativo”.

Sin retenciones

Sí, también piden la eliminación gradual de las retenciones. Lo que proponen es ir eliminándolas y transformarlas en un pago anticipado del impuesto a las ganancias. El planteo es un enfoque “Federal” de la base tributaria. Las retenciones son potestad del Poder Ejecutivo, mientras el impuesto a las ganancias es coparticipable.

Territorio

La cadena agroindustrial representa el 70% del territorio nacional: unas 170 millones de hectáreas. El “Club” de los ex secretarios lo define como sectores multiproductivos integrados con una visión de desarrollo “territorial”. Es decir, consideran que el crecimiento con desarrollo económico en las más de 3000 ciudades en las que vive un tercio de los 40 millones de argentinos podría no tener que migrar a las grandes urbes para ganarse la vida si se tuviera esta visión. “Los intendentes conocen la realidad de sus poblaciones, pero en lugar de gobernar orientado hacia una visión de largo plazo, edifican políticas de crecimiento a corto plazo y no coincide una mirada de desarrollo con una meramente política”, explican.

Mitos

De acuerdo a lo que esgrimieron los ex secretarios, para desarrollar políticas que lleven a desarrollar un país que contiene unas 400 mil Pymes de productos y servicios volcadas a las cadenas agroindustriales, que pongan énfasis en la creación de “más de 4500 kilómetros de autopistas”, la recuperación de los ferrocarriles y el desarrollo de la hidrovía, seguro harán falta números que lo justifiquen. El Club de ex secretarios los llevó: la agroindustria nacional, siempre de acuerdo a sus cálculos, representa el 22% del PBI, 55% del valor de las exportaciones, entre el 20 y el 25% del empleo y el 35% de la recaudación fiscal.

Son los cálculos del los que se valen para derribar el “mito de que la industria automotriz genera miles de puestos de trabajo”. Sin desmerecer al importante sector industrial, los ex hombres del campo en la Rosada argumentan que “con un 50% más de producción de automóviles (se calcula que Argentina finaliza 2011 con 800 mil unidades), se generaron 11 mil empleos”, mientras que si se pasara de 100 millones a 200 millones de toneladas de granos producidas, “se generarían 200 mil puestos de trabajo”.

Para lograrlo, piden la creación de una agencia para promover políticas agropecuarias que no pierdan de vista la “Big Picture” de lo que moviliza lo que llaman “el corazón de la economía nacional” o el “motor del desarrollo”. Como ejemplo, mencionan las agencias de promoción de la cadena agroindustrial en Chile, Australia o Nueva Zelanda y fortalecer Tratados de Libre Comercio entre bloques, como la UE y el Mercosur.

Entre los últimos puntos, figuran el desarrollo de una política de preservación y expansión forestal, promover Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas de Manufactura Agropecuaria, un marco nacional de conservación de suelos y fondeo y más recursos humanos para el estudio de las potencialidades de los recursos naturales.

*“La ventaja que hoy existe y que nosotros no tuvimos fue la de sentarse con los ministros. Los ministros van a la reunión de Gabinete, donde se discuten las políticas”, señalaron. Una mirada constructiva en un ámbito surcado por acusaciones: basta recordar la “guerra” Campo-Gobierno o la acción disciplinante de la presidenta Cristina Fernández, cuando en el aniversario 126 de la Bolsa **señaló que en el sector existe una “gran evasión” impositiva.***

Página 12

DOMINGO, 17 DE JULIO DE 2011/ENFOQUE

Por Claudio Scaletta

Armonías agroenergéticas

Si algo puede caracterizar globalmente a la economía argentina desde la recuperación de la democracia hasta bien terminado el siglo XX es su estancamiento. No hacen falta muchos argumentos, basta con mirar los números. Rápidamente, sin ninguna sofisticación analítica, pueden agregarse los ciclos de explosivo endeudamiento público, con concentración y centralización del capital.

No son temas nuevos sino ampliamente tratados por la literatura económica: estancamiento, endeudamiento, concentración; precisamente lo contrario del presente. Haber ocupado funciones de gobierno durante estas dos primeras décadas democráticas es entonces un pobre pergamino para argumentar desde la presunta autoridad.

Si uno integró el staff de los decisores públicos en las principales áreas, como la agricultura o la energía, haría bien en consagrar sus esfuerzos intelectuales a la autocrítica o, si se quiere, al asesoramiento privado a los bendecidos de ayer. Se espera que un pudor elemental autoexcluya a los representantes de tiempos fracasados de dar cátedra sobre el deber ser de las políticas del presente.

Sin embargo, no parece ser el caso de muchos "ex secretarios" que, para beneplácito de la siempre ávida cadena nacional de medios privados, comenzaron a generar una seguidilla de documentos que condensan, en esencia, aunque con variados ropajes y floripondios contextuales, el remanido compendio de demandas impositivas y de precios plenos que encantan a las cúpulas empresarias.

Los documentos generados la semana pasada por los ex secretarios de Agricultura y, la anterior, por los de Energía, son públicos. Cualquiera puede tomarse la tarea de recorrerlos. Más en el caso de energía que de agricultura, los trabajos también destacan algunos problemas reales. Resulta de interés evitar el rechazo in limine de algunas críticas, pero también es necesario destacar los puntos comunes subyacentes.

Las políticas de los años '90 en materia de hidrocarburos dieron lugar a la sobreexplotación de los yacimientos en paralelo a la baja inversión en exploración para la reposición de reservas. La privatización y extranjerización de YPF junto a la desregulación del mercado local permitieron absurdos como que los consumidores españoles pagaran menos por los combustibles extraídos en la Argentina que los locales. En el presente, el resultado de aquellas políticas, de las que participaron activamente algunos de los hoy hipercríticos ex secretarios, es la caída tanto de la producción como de las reservas.

La existencia de recursos no convencionales (hidrocarburos de arenas y arcillas compactas) por ahora es sólo una esperanza de mediano plazo que demandará ingentes inversiones para su transformación en reservas comprobadas. La estructura de subsidios es una forma de reparto de la renta petrolera que presenta algunas distorsiones evidentes que agradecen los habitantes de barrios cerrados y residenciales, entre otros (extrañamente) beneficiados.

En un marco de fuerte crecimiento de la economía, uno de los resultados acumulados de estas políticas energéticas es la reciente pérdida del autoabastecimiento y, consecuentemente, la importación a mayor precio de lo que, bajo ciertas circunstancias, podría producirse internamente a un precio menor.

Es posible todavía escudarse en las políticas de los '90 para explicar el presente, pero también es tiempo de políticas consistentes que trabajen para revertir la situación. La demanda que subyace en el documento de los ex secretarios de energía es una propuesta integral: implica orientar la acción del Estado para que las empresas reciban los precios más cercanos posibles a los internacionales y que no les toque pagar indirectamente ningún subsidio; como sucede hoy, por ejemplo, con los precios recibidos por el gas destinado a consumo domiciliario. También agrega datos de la coyuntura, como una presunta permisibilidad estatal a los bloqueos de yacimientos.

La propuesta de los ex funcionarios es acorde con la actual estructura de propiedad del sector hidrocarburífero, una lógica que el Estado aceptó parcialmente a través de los llamados programas Plus, que ya son más de 70 y que permiten a las petroleras acceder a un precio diferencial para el gas y petróleo “nuevos”, incluidos los de yacimientos no convencionales. Este mayor precio, que no llega al internacional, es el que habilitó nuevas inversiones. Adicionalmente se espera a futuro un desarme progresivo de la estructura de subsidios. El resultado palpable es un aumento gradual del precio promedio recibido por las operadoras en “boca de pozo”, que a la vez significa mayores regalías para las provincias productoras, hoy atadas a la suerte de las empresas.

Por estas características, el modelo actual fue calificado acertadamente como “mixto” versus los tiempos de la YPF estatal y la desregulación indiscriminada de los '90. Aunque consistente en sus propios términos, el documento de los ex secretarios evita recordar que las propuestas de desregulación demandadas, junto a las promesas de inversiones prometidas, son un ensayo ya realizado y con consecuencias conocidas. Hipercrítica sin autocrítica.

El espíritu del documento de los ex secretarios de Agricultura es similar. También subyace en él, mucho más explícitamente, la demanda por la eliminación de retenciones y menos impuestos y regulaciones. La diferencia es que resulta más elemental. Parte de desconocer un punto que muchas veces se trató en este espacio: la existencia de una estructura productiva desequilibrada que demanda tipos de cambio diferenciales. Acto seguido, presenta una visión Billiken del sector agropecuario: sector que dejó de ser rudimentario y extensivo para transformarse en una suerte de oasis de alta tecnología.

Con potentes concatenaciones en la industria y los servicios. Según los ex funcionarios, el problema residiría en que los nuevos desarrollos y oportunidades no serían reconocidos por un sector público que, para colmo, vería al agro como su enemigo. Se renueva así la vieja miopía sectorial que insiste en recorrer caminos que el tránsito histórico demostró socialmente inviables; como lo es creer que la expansión agropecuaria alcanza para el desarrollo de una estructura productiva inclusiva del conjunto de la población.

Finalmente, los ex secretarios de ambas áreas no son muy originales. Una consultora de raíz mediterránea que vivió su etapa de auge en los '90 lleva adelante por estos meses un recorrido descriptivo por las distintas "cadenas productivas" del país. El capítulo final de todos los documentos sectoriales generados son las "recomendaciones de política". El corolario no tiene sorpresas, es una suerte de copy & paste. Irremediablemente se termina, cualquiera sea la cadena, demandando la eliminación de retenciones y la baja de cargas patronales y otros impuestos. El mundo neoliberal es tan simple y armónico que para llegar al paraíso sólo hace falta eliminar cualquier traba que pese sobre el desenvolvimiento del libre mercado. Así, automáticamente, la riqueza se multiplicará como los panes de la fábula y, luego, derramará sobre el conjunto de la sociedad. El proceso es tan evidente que los economistas bien podrían ahorrarse el dispendio de estudiar economía

lanacion.com

Por Mercedes Colombres / Jueves 04 de agosto de 2011 | Publicado en edición impresa
Comercio agropecuario / Debate sobre la política que necesita el sector

Piden el fin de la intervención al campo

Un grupo de ex secretarios de Agricultura advirtió que el Gobierno debe sacar los controles si quiere que se mantenga el crecimiento

Convocados a un debate por la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), los ex secretarios de Agricultura Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Rafael Delpech y Jesús Leguiza reclamaron la liberación del comercio y de las exportaciones del sector agropecuario y advirtieron que "ningún productor va a querer agregar valor a los granos, como pide el Gobierno, si no puede exportar y vender libremente, y tiene que lidiar con gran cantidad de controles".

Esta fue una de las conclusiones centrales del debate, en el que también participaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, y los periodistas Matías Longoni, de Clarín, y Raúl Dellatorre, de Página 12, y que se centró en el contenido del documento .

"La agroindustria para el desarrollo argentino, aportes para una política de Estado", presentado por Reca, Regúnaga, Delpéch y Leguiza recientemente. "Hoy todo el mundo habla alegremente de agregar valor, pero la forma de agregar valor a nuestros granos es producir carne y leche. Y acá nadie va a producir estos productos si no los puede exportar, que es lo que pasa hoy", advirtió Regúnaga.

En esta misma línea habló Biolcati. "El Gobierno critica al campo por la sojización, pero con la intervención permanente en la carne, la leche, el maíz y el trigo empuja a los productores a hacer cada día más soja. Es el Gobierno el que está impulsando el avance del desierto verde, y el no agregado de valor", destacó el presidente de la Rural.

Por su lado, Delpéch acotó que el concepto de agregado de valor no siempre es lo que parece. "Hoy en día cotiza mucho mejor una manzana o limón fresco para exportar, producido bajos determinados estándares, que estos frutos industrializados. El concepto de valor agregado es muy complejo", dijo Delpéch.

Desarrollo Extraordinario

Por otro lado, los ex secretarios de Agricultura coincidieron en que el sector agropecuario está teniendo un desarrollo extraordinario, pero que no está aprovechando todas las oportunidades que tiene. "La agricultura creció a un promedio del 5 por ciento anual en los últimos años. Pero el crecimiento podría haber sido mucho mayor si se hubieran aplicado las políticas adecuadas. De eso se trata este documento, de plantear qué políticas necesitamos para aprovechar mejor el momento", destacó Reca.

Delpéch subrayó la necesidad de tener una visión integrada de lo rural y de lo urbano, que se expresa en el trabajo. "El país todavía tiene la visión antigua de ciudad y campo por separado, y eso es favorecido por el sistema tributario, que deslinda el aporte de la producción de los gobiernos locales, ya que la recaudación va a parar a manos del Estado nacional y éste la reparte", explicó Delpéch.

Biolcati coincidió con este concepto y apuntó: "Hoy se desmerece el trabajo del sector dentro de la economía nacional". Por su parte, Marcelo Regúnaga y Jesús Leguiza enumeraron los nueve pilares sobre los que, de acuerdo con su estudio, debería basarse una buena política agropecuaria: la promoción de la adopción de tecnología; el libre comercio agropecuario; una política impositiva que priorice los impuestos coparticipables; la apertura de nuevos mercados; la construcción de infraestructura de transporte y riego.

La promoción de la sustentabilidad, el desarrollo de productos estratégicos como la bioenergía; la promoción de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria.

Luego de terminadas las exposiciones de los secretarios, uno de los panelistas destacó la necesidad de recuperar la institucionalidad del sector, uno de los pilares de la política propuesta por los ex secretarios. "La Secretaría de Agricultura pese a ser ahora un ministerio es una cáscara. Tenemos que devolverle la importancia que tenía", explicó Longoni.

Seguidamente, uno de los periodistas preguntó si el aprovechamiento de las oportunidades del mercado mundial, que propone el estudio de los ex funcionarios, no es opuesto a la defensa de la soberanía alimentaria.

"Tenemos que debatir sobre si es posible solucionar el hambre del país con un modelo de producción orientado a aprovechar los precios internacionales, y ver cómo vamos a manejar el tema de los precios internos ", dijo, que además agregó: "La política agropecuaria de este gobierno es difícil de definir, por la contradicción entre los enunciados del Ministerio de Agricultura y lo que se lleva a la práctica desde la Secretaría de Comercio Interior"

Prensa- Enlaces:

Conferencia en Rosario de los 4 Ex Secretarios de Agricultura del 17/07/2011.

La Bolsa de Comercio del Rosario



Régunaga

Reca

Leguiza

Delpech

